

Protocolo con perspectiva étnica para la ejecución de iniciativas de mitigación de gases efecto invernadero en territorios de comunidades indígenas.

Resumen Ejecutivo

ÍNDICE

ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS	2
1. Introducción	2
2. Definición de actores y fases del ciclo de iniciativas de mitigación de GEI.....	3
2.1. Actores y roles	3
2.2. Fases del ciclo de las iniciativas de mitigación de GEI.....	5
3. Referentes normativos y enfoques	6
3.1. Referentes normativos	6
3.2. Acciones concretas que garantizan los derechos de libre determinación, autonomía, autogobierno, territorio, identidad, integridad física y cultural, y consulta y/o consentimiento libre, previo e informado	8
4. Medidas, mecanismos, esquemas y directrices para garantía de derechos de comunidades étnicas y locales en proyectos REDD+ e iniciativas de mitigación de GEI .	10
4.1. Medidas para superar fallas y problemas identificados en la ejecución de iniciativas de mitigación en territorios étnicos	10
4.2. Mecanismos para determinar la titularidad de proyectos REDD+ en territorios indígenas, ya sea que su operación recaiga directamente en la comunidad indígena o en un actor externo, socio o intermediario	20
4.3. Mecanismo para determinar las actividades y objetivos de los proyectos REDD+, sin afectar sus modos de vida, bajo una perspectiva de acción sin daño y asegurando acciones de conservación y preservación ambiental.....	25
4.4. Esquema de beneficios económicos, su duración y condiciones	27
4.5. Directrices para promover estándares de debida diligencia de las empresas participantes en el mercado de carbono forestal	33
5. Escenarios de participación	38
6. Alcance del Protocolo	40
7. Financiamiento	41
Referencias bibliográficas	42

ABREVIATURAS Y ACRÓNIMOS

ACNUDH: Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos
ANLA: Autoridad Nacional de Licencias Ambientales
CAR: Corporaciones Autónomas Regionales
CIDH: Comisión Interamericana de Derechos Humanos
CMNUCC: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
CPLI: Consulta Previa, Libre e Informada
DDHH: Derechos Humanos
DNP: Departamento Nacional de Planeación
GEI: Gases de Efecto Invernadero
IDEAM: Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales
IPLC: Indigenous Peoples and Local Communities (Pueblos Indígenas y Comunidades Locales)
Minambiente: Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible
MRV: Monitoreo, Reporte y Verificación
NDC: Contribución Determinada a Nivel Nacional
OEA: Organización de los Estados Americanos
OIT: Organización Internacional del Trabajo
ONU: Organización de las Naciones Unidas
ONU-REDD: Programa Colaborativo de las Naciones Unidas para la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
REDD+: Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y la Degradación de los Bosques, más conservación, manejo sostenible de los bosques y aumento de las reservas forestales de carbono
RENARE: Registro Nacional de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero
SbN: Soluciones basadas en la Naturaleza
SSA: Salvaguardas Sociales y Ambientales
SINA: Sistema Nacional Ambiental
UNDRIP: United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas)

1. Introducción

La Corte Constitucional ordenó al Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (en adelante, Minambiente), en la primera sentencia en la que evaluó el impacto del mercado voluntario de carbono en poblaciones indígenas, coordinar la creación de un protocolo con perspectiva étnica para la ejecución de proyectos REDD+ en territorios indígenas, en correspondencia con lo dispuesto en la Resolución 1447 de 2018, que deberá ser consultado previamente e incluir, como mínimo:

- i. Medidas para superar las fallas y problemas identificados en esa providencia;
- ii. Acciones concretas que garanticen los derechos de libre determinación, autonomía, autogobierno, territorio, identidad, integridad física y cultural, y consulta y/o consentimiento libre, previo e informado;
- iii. Mecanismos para determinar la titularidad de los proyectos REDD+ en territorios indígenas, ya sea que su operación recaiga directamente en la comunidad indígena o en un actor externo, socio o intermediario;

- iv. Mecanismos para determinar las actividades y objetivos de los proyectos REDD+, sin afectar sus modos de vida, bajo una perspectiva de acción sin daño y acreditando acciones de conservación y preservación ambiental;
- v. Esquema de beneficios económicos, su duración y condiciones; y
- vi. Directrices para promover estándares de debida diligencia de las empresas participantes en el mercado de carbono forestal.

Con el fin de avanzar en el cumplimiento de dicha sentencia, Minambiente ha construido este documento base que será puesto a disposición de los procesos de consulta correspondientes tanto con las entidades involucradas en el marco de sus competencias, como de las comunidades indígenas conforme se ordena en Sentencia T-248 de 2024.

Los principios, criterios, lineamientos y directrices aquí contenidas deben ser aplicadas a los proyectos REDD+ en el marco del mercado voluntario del carbono.

2. Definición de actores y fases del ciclo de iniciativas de mitigación de GEI

2.1. Actores y roles

En el marco de las iniciativas de mitigación de GEI tanto en el mercado *voluntario*¹ como en el *regulado*² del carbono, así como del esquema de *pagos por resultados*³, existen diversos actores que intervienen con distintos roles y funciones.

A continuación, se describen cada uno de los actores y sus roles:

- **Comunidades étnicas**, se refiere a quienes pueden ser titulares y beneficiarios de las iniciativas de mitigación; cuya participación en la toma de decisiones relacionadas con la iniciativa de mitigación debe realizarse a través de sus formas de gobierno propio. En el sistema jurídico colombiano, se les considera, como Pueblos Indígenas y comunidades Negras, Afrodescendientes, Raizales y Palenqueras (NARP) y el Pueblo RROM o Gitano.
- **Comunidades locales**, se refiere a quienes pueden ser titulares, beneficiarios de las iniciativas de mitigación; cuya participación en la toma de decisiones relacionadas con la iniciativa de mitigación debe realizarse a través de sus formas de gobierno propio. En el sistema jurídico colombiano, se les considera como el campesinado, como sujetos de derechos y sujetos de especial protección.
- **Titular de la iniciativa**: Se refiere a toda persona natural o jurídica, pública o privada, responsable de asegurar la transparencia de cada una de las etapas de: factibilidad, formulación, implementación, seguimiento y registro de las iniciativas en la plataforma del Registro Nacional de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero, RENARE. En proyectos REDD+ son titulares *las comunidades étnicas y campesinas*, como propietarias colectivas del territorio.

¹ Las personas naturales o jurídicas podrán participar en el mercado voluntario mediante la transacción de certificados de resultados de mitigación de gases de efecto invernadero (GEI), con el fin de alcanzar sus propósitos individuales y metas organizacionales de mitigación frente al cambio climático. La regulación y supervisión de estas transacciones se llevará a cabo conforme a las disposiciones establecidas en la normatividad vigente.

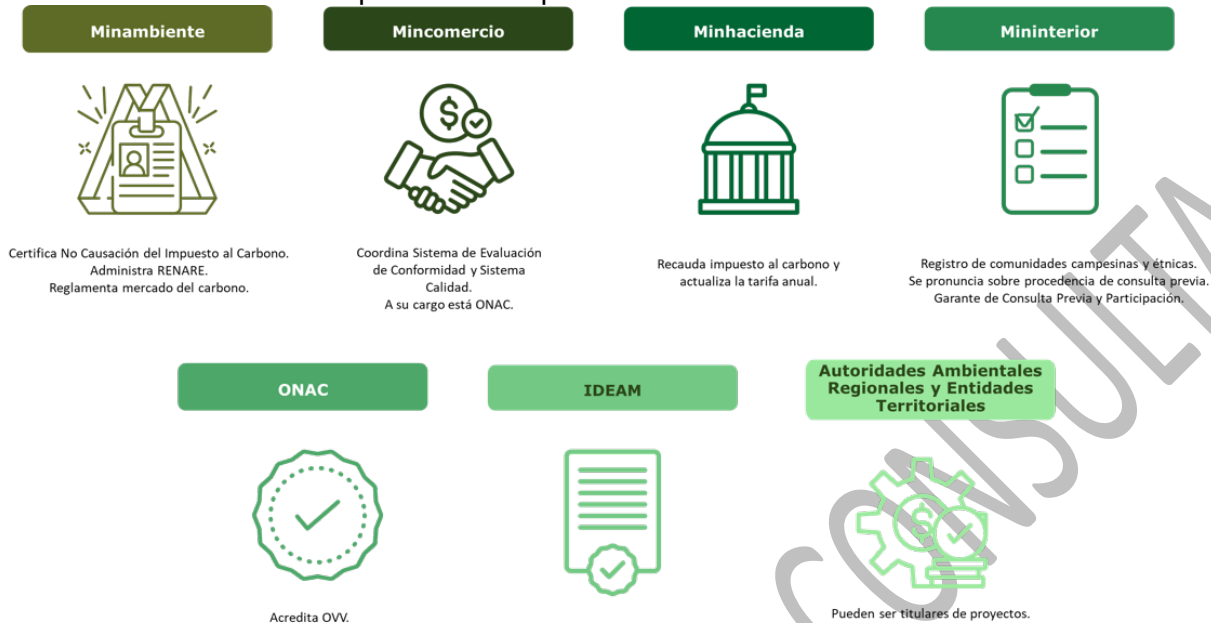
² El mercado regulado contribuirá al logro de las metas nacionales de mitigación y podrá tener carácter obligatorio, según lo establecido en la normatividad expedida por el Gobierno Nacional. Como parte de este mercado se reconocerán mecanismos como el Programa Nacional de Cupos Transables de Emisión.

³ El esquema de Pago por Resultados permitirá la obtención de remuneraciones, beneficios o incentivos con base en resultados de mitigación verificados. Estos resultados deberán derivarse de la implementación de iniciativas de reducción de gases de efecto invernadero (GEI) dentro del territorio nacional, ya sea de manera total o parcial.

- **Aliado técnico o desarrollador:** Es el tercero que acuerda con el titular de la iniciativa de mitigación de GEI, el desarrollo de todas, una o varias actividades del ciclo de la iniciativa de mitigación, sin que ello implique la cesión de la titularidad de dicha iniciativa, ni el desconocimiento de derechos y salvaguardas. Quien actúe como aliado técnico demostrará, que posee las facultades de representación que le han sido otorgadas por el titular de la iniciativa, de conformidad con la normativa vigente. Será igualmente *corresponsable* del cumplimiento de las Salvaguardas Sociales y Ambientales y de garantizar la debida diligencia en derechos humanos, en todas sus actuaciones.
- **Programas de certificación de GEI o Estándares de Carbono.** Son sistemas o esquemas voluntarios u obligatorios, internacionales o nacionales, que enuncian, según un conjunto de principios, procedimientos, metodologías, herramientas, criterios y requisitos, la formulación, implementación, validación, verificación y certificación de los resultados de mitigación. Además de formular estos elementos para las iniciativas de mitigación de GEI, también cumplen el rol de *certificadores* de los resultados de mitigación (y emiten un certificado de resultados de mitigación).
- **Organismo de Validación y Verificación:** Es el órgano acreditado por el Organismo Nacional de Certificación, ONAC, que funge como *tercero independiente*, encargado de realizar el proceso de evaluación de la conformidad de la iniciativa de mitigación de GEI, la cual incluye la validación y/o verificación del cumplimiento de las Salvaguardas Sociales y Ambientales.
- **Comprador de certificados de resultados de mitigación.** Son todas las personas naturales o jurídicas (como las empresas), públicas o privadas (nacionales o transnacionales), interesadas en la compra directa o indirecta y la comercialización de los certificados de resultados de mitigación de GEI, para la compensación de su huella de carbono y, en el caso de Colombia, la no causación del impuesto al carbono u otros fines, y son responsables del cumplimiento de la diligencia debida en materia de derechos humanos. El comprador de certificados de resultados de mitigación será responsable de *elegir* certificados que cumplan con los criterios aquí establecidos y demás normativa vigente.

Por otro lado, y en cuanto a la *estructura institucional* que acompaña o actúa el marco del desarrollo de las iniciativas de mitigación, se encuentran las siguientes entidades públicas:

Gráfico 1: Principales actores públicos involucrados – escenario actual

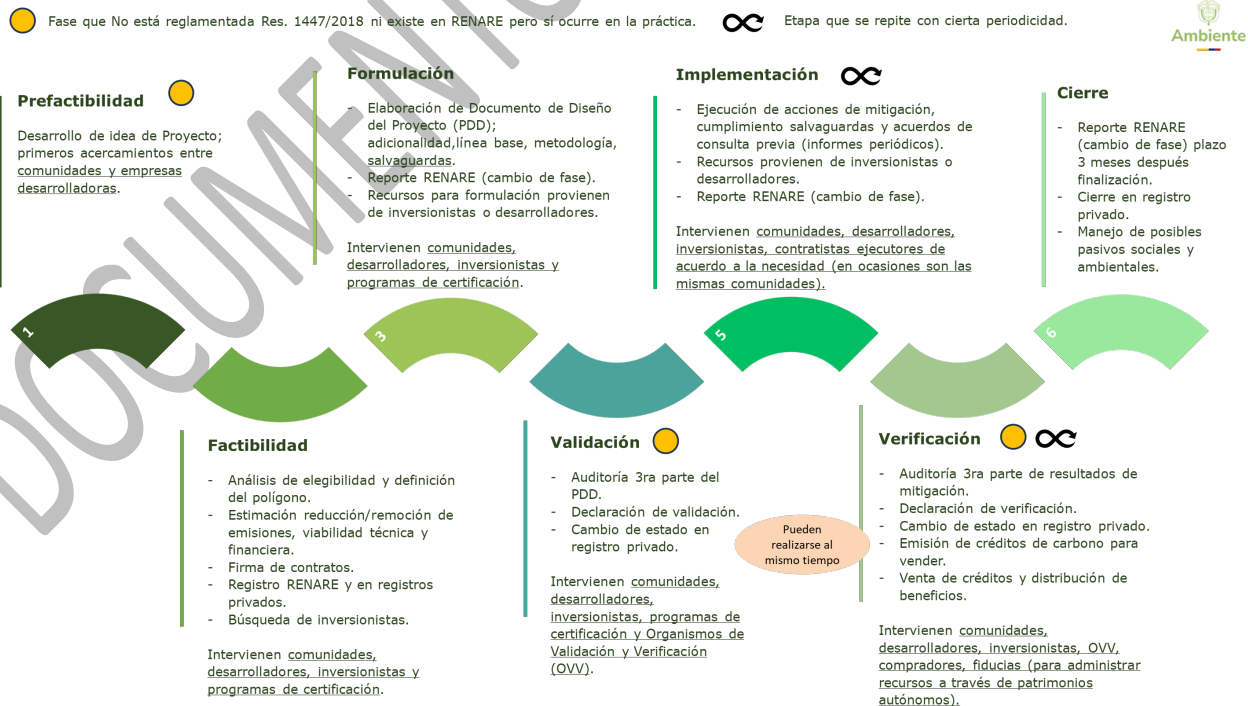


Fuente: elaboración propia, 2026

2.2. Fases del ciclo de las iniciativas de mitigación de GEI

En este apartado se aborda la descripción de las fases del ciclo de la iniciativa de mitigación de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Toda iniciativa de mitigación que pretenda participar en mercados de carbono deberá surtir las siguientes fases:

Gráfico 2: Fases del ciclo de las iniciativas de mitigación de GEI



3. Referentes normativos y enfoques

3.1. Referentes normativos

Este Protocolo ha sido formulado con base en el marco legal, normativo, lineamientos de política pública y acuerdos internacionales adoptados por Colombia, en estado vigente, el cual se describe a detalle en la siguiente tabla:

Tabla 1: Referentes políticos, legales y normativos

Norma	Descripción
Constitución Política de Colombia	Es la ley suprema y fundamental del país que reconoce los derechos de las comunidades étnicas para su protección y evitar su discriminación ante la ley.
Ley 21 de 1991	Por medio de la cual se aprueba el Convenio número 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, adoptado por la 76ª reunión de la Conferencia General de la O.I.T., Ginebra 1989, incluye a los Pueblos Indígenas y las Comunidades Afrodescendientes.
Ley 99 de 1993	Crea el Ministerio del Medio Ambiente y el Sistema Nacional Ambiental SINA.
Ley 70 de 1993	Por la cual se desarrolla el artículo transitorio 55 de la Constitución Política y reconoce el derecho de propiedad colectiva de las comunidades negras sobre algunas porciones del territorio nacional.
Ley 1844 de 2017	Por medio de la cual se aprueba el “Acuerdo de París”, adoptado el 12 de diciembre de 2015
Ley 165 de 1994	Que adopta el Convenio de Diversidad Biológica – Protocolo de Nagoya.
Ley 164 de 1994	Que ratifica la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) de 1992.
Ley 1257 de 2008	Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se dictan otras disposiciones.
Ley 248 de 1995	Por medio de la cual se aprueba la Convención Internacional para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, suscrita en la ciudad de Belém Do Para, Brasil, el 9 de junio de 1994.
Ley 467 de 1998	Por medio de la cual se aprueba la enmienda al artículo 8º de la Convención Internacional de 1965 sobre la eliminación de todas las formas de la discriminación racial.
Ley 1753 de 2015	Creó el Registro Nacional de Reducción de Emisiones de Gases Efecto Invernadero, RENARE.
Ley 2169 de 2021	Por medio de la cual se impulsa el desarrollo bajo en carbono del país mediante el establecimiento de metas y medidas mínimas en materia de carbono neutralidad y resiliencia climática y se dictan otras disposiciones.
Ley 1931 de 2018	Por la cual se establecen directrices para la gestión del cambio climático.
Ley 1755 de 2015	Por medio de la cual se regula el Derecho Fundamental de Petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Ley 1712 de 2014	Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones.
Decreto 1384 de 2023	Por el cual se reglamenta el capítulo IV y las demás disposiciones ambientales contenidas en la Ley 70 de 1993, en lo relacionado con los recursos naturales renovables y del ambiente, en los territorios colectivos adjudicados, en trámite u ocupados ancestral y/o tradicionalmente por las comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras
Decreto 2164 de 1995	Reglamenta parcialmente el Capítulo XIV de la Ley 160 de 1994, en lo relacionado con la dotación y titulación de tierras a las comunidades indígenas para la constitución, reestructuración, ampliación y saneamiento de los Resguardos Indígenas en el territorio nacional.

Norma	Descripción
Decreto 1397 de 1996	Crea la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos y organizaciones indígenas.
Decreto 3012 de 2005	Por medio del cual se crea la Mesa Regional Amazónica para los Pueblos Indígenas de la Amazonia Colombiana, como un espacio de concertación para recomendar políticas públicas y participar en su evaluación y seguimiento en relación con el desarrollo sostenible de los pueblos indígenas de la Amazonia.
Decreto 632 de 2018	Por el cual se dictan las normas fiscales y demás necesarias para poner en funcionamiento los territorios indígenas ubicados en áreas no municipalizadas de los departamentos de Amazonas, Guainía y Vaupés.
Decreto 1275 de 2024	Por el cual se establecen las normas requeridas para el funcionamiento de los territorios indígenas en materia ambiental y el desarrollo de las competencias ambientales de las autoridades indígenas y su coordinación efectiva con las demás autoridades ambientales y/o entidades.
Decreto 488 de 2025	Que tiene por objeto dictar las normas necesarias para la puesta en funcionamiento de los Territorios Indígenas respecto de sus estructuras de gobierno, los procedimientos para el ejercicio de competencias y atribuciones constitucionales y legales, normas fiscales, la definición de sus límites y la coordinación con las demás entidades e instituciones del Estado
Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos indígenas	Es el instrumento internacional más exhaustivo sobre los derechos de los pueblos originarios. Establece normas mínimas para la supervivencia, dignidad y bienestar de los pueblos indígenas, reconociendo derechos colectivos e individuales sobre tierras, cultura, identidad y libre determinación.
Convenio 169 de la OIT	Ratificado en Colombia mediante la <u>Ley 21 de 1991</u> , es el principal tratado internacional que protege los derechos colectivos e individuales de los pueblos indígenas.
Decreto 1791 de 1996	Tiene por objeto regular las actividades de la administración pública y de los particulares respecto al uso, manejo, aprovechamiento y conservación de los bosques y la flora silvestre con el fin de lograr un desarrollo sostenible.
Decreto 446 de 2020	Que reglamenta lo relacionado con la acreditación de organismos de verificación de reducciones de emisiones y remociones de gases de efecto invernadero.
Resolución 1447 de 2018	Por la cual se reglamenta el sistema de monitoreo, reporte y verificación de las acciones de mitigación a nivel nacional de que trata el artículo 175 de la Ley 1753 de 2015, y se dictan otras disposiciones.
Decreto Ley 2811 de 1974	Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente
Decreto 2363 de 2015	Por el cual se crea la Agencia Nacional de Tierras, (ANT), se fija su objeto y estructura.
Principios de debida diligencia y Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos	Establecen que las empresas deben respetar los derechos humanos mediante la debida diligencia, un proceso continuo para identificar, prevenir, mitigar y reparar impactos negativos en su cadena de valor.
Decisión Andina 391 de 1996	Protección de recursos genéticos y protección de conocimiento tradicional asociado.
Decreto 2811 de 1994	Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección al Medio Ambiente.
Decreto 1232 de 2018	Por el cual se adiciona el <u>Capítulo 2</u> , del Título 2, de la Parte 5, del Libro 2 del Decreto 1066 de 2015, Único Reglamentario del Sector Administrativo del Interior, para establecer medidas especiales de prevención y protección de los derechos de los Pueblos Indígenas en Aislamiento o Estado Natural y se crea y organiza el Sistema Nacional de Prevención y Protección de los derechos de los Pueblos Indígenas en Aislamiento o Estado Natural.
Decreto 1320 de 1998	Por el cual se reglamenta la consulta previa con las comunidades indígenas y negras para la explotación de los recursos naturales dentro de su territorio.
Resolución 418 de 2024	Mediante la cual se modificó parcialmente la Resolución 1447 de 2018, según la cual el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible asume la administración del Registro Nacional de Reducción de las Emisiones y Remoción de Gases de Efecto Invernadero (RENARE), una plataforma que permite el seguimiento a la reducción de emisiones de Gases Efecto Invernadero en el país.

Norma	Descripción
Decreto 446 de 2020	Reglamenta lo relacionado con la acreditación de organismos de verificación de reducciones de emisiones y remociones de gases de efecto invernadero.

Fuente: elaboración propia, 2026.

3.2. Acciones concretas que garantizan los derechos de libre determinación, autonomía, autogobierno, territorio, identidad, integridad física y cultural, y consulta y/o consentimiento libre, previo e informado

Este protocolo se corresponde con la Resolución 1447 de 2018 y la legalidad colombiana, e incorpora la *perspectiva étnica*, a través de los enfoques de derechos humanos, de género, étnico y territorial. Estos aspectos marcan los criterios para ser aplicados durante todas las fases de las iniciativas de mitigación, y se abordarán de manera amplia, teniendo como base el reconocimiento constitucional y legal de la diversidad étnica y cultural en el país. Posteriormente, como resultado de los acuerdos logrados con las comunidades indígenas como resultado de la Consulta Previa, se generarán *capítulos correspondientes* en el Protocolo. Tener en cuenta que este Protocolo, en cumplimiento de la orden 11 de la Sentencia T248 de 2024 “*deberá ser consultado previamente*”.

En el marco de los derechos ambientales, el enfoque étnico tiene un lugar relevante, a través de la relación histórica, material y simbólica en la que coexisten los pueblos étnicos con el territorio como propietarios colectivos, cuidadores y administradores y, en este sentido, se hace necesario que las perspectivas sobre la noción de “naturaleza”, la conservación y el cuidado de los territorios estén en un permanente diálogo y respecto con las cosmovisiones, cosmologías, usos y prácticas tradicionales de carácter económico, societal y familiar, contextos culturales, espirituales y regionales de estos titulares de derechos. Por ello, es necesario comprender que la relación entre “la naturaleza” y las comunidades étnicas configura sus sistemas familiares y comunitarios, sus sistemas tradicionales y ancestrales⁶, sus lugares sagrados y compromete su ordenamiento territorial.

El enfoque étnico se centra en el reconocimiento y respeto de los derechos humanos, en particular los contenidos en el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que incluyen los conocimientos y prácticas ancestrales de los pueblos étnicos en la gestión de sus territorios y recursos o bienes naturales. Así mismo, promueve la activa participación de las comunidades étnicas en la toma de decisiones que afectan su entorno, garantizando que sus sistemas de conocimiento sean integrados, entre otras, en las políticas y acciones ambientales, mediante los procesos de consulta previa y el Consentimiento Libre, Previo e Informado, según lo resuelva la autoridad competente.

El enfoque de derechos que aborda este Protocolo se sustenta en la Constitución Política de 1991, que reconoce al país como pluriétnico y multicultural, y consagra derechos fundamentales relacionados con la diversidad cultural, lingüística, la identidad, la participación y la autonomía de los pueblos étnicos.

Por otra parte, el enfoque territorial está direccionado hacia el reconocimiento de territorialidades, relaciones multidimensionales de los territorios como sujetos de derechos, poblacionales, sociales, ambientales y culturales. De esta forma, los territorios no solo proporcionan escenarios, también son agentes para la ejecución de las iniciativas de mitigación, las cuales deben responder a las prioridades y objetivos comunes de esta estrategia. Los territorios indígenas

tienen el carácter de Entidades Territoriales⁴, a las cuales el Estado debe proteger (Arts. 286 y 329) y en los cuales las Autoridades tradicionales y las Asociaciones de Cabildos pueden ejercer funciones jurisdiccionales (Art.246); así mismo las Autoridades Ambientales Indígenas reglamentadas mediante el decreto 1275 de 2024, generan una gobernanza que reconoce el funcionamiento de los territorios indígenas en materia ambiental y el desarrollo de las competencias ambientales de las autoridades indígenas y su coordinación efectiva con las demás autoridades y/o entidades.

A continuación, se desarrolla el entendimiento de los derechos de las comunidades étnicas frente a estos conceptos:

- **Libre determinación y autonomía:** se trata de garantizar la autonomía de las comunidades étnicas para decidir libremente sus formas de vida y sus prioridades de desarrollo económico, social y cultural. Lo anterior en armonía con el derecho a la autonomía y al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas. En el desarrollo de las iniciativas de mitigación se debe propender por el fortalecimiento de “los ejercicios de gobernanza propia y forestal en el territorio”, por lo que las empresas deben abstenerse de propiciar disputas internas entre los miembros de las comunidades.
- **Territorio:** A nivel jurisprudencial, el territorio -como concepto- tiene una visión más amplia que el espacio geográfico, según la sentencia T-236 de 2012. El concepto de territorio involucra no solamente la idea geográfica de una porción de tierra, sino también la soberanía como ejercicio de poder, y así el dominio, autoridad y gobierno sobre los recursos humanos y materiales; esto es, el territorio indígena en nuestro orden constitucional involucra actividades políticas, económicas, sociales, jurídicas y culturales. En este orden el referente del territorio para la jurisdicción indígena significa que su otorgamiento lleva ínsito la dinámica de gobernarse según sus propias reglas. (T-236, 2012).
- **Identidad, integridad física y cultural:** la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los Pueblos Indígenas establece que los pueblos y los individuos indígenas tienen derecho a pertenecer a una comunidad o nación indígena, y seguir las tradiciones y costumbres de esta. Del ejercicio de ese derecho no puede resultar discriminación de ningún tipo.

En ese orden de ideas, las iniciativas de mitigación deben garantizar que las acciones de mitigación no sólo se formulen en el marco del autogobierno y libre determinación, sino que también estén en armonía con la identidad, es decir, a mantener, proteger y desarrollar las manifestaciones pasadas, presentes y futuras de sus culturas, como lugares arqueológicos e históricos, objetos, diseños, ceremonias, tecnologías, artes visuales e interpretativas y literaturas.

Los espacios de toma de decisiones, rendición de cuentas, deberán realizarse respetando sus propias formas de gobierno, sus culturas, prácticas y creencias espirituales, usos y costumbres, normas y tradiciones, propias lenguas e idiomas.

- **Consulta previa y consentimiento libre, previo e informado:** el Relator Especial de la ONU sobre los derechos de los pueblos indígenas ha sido enfático en que los Estados deben “cumplir el deber de celebrar consultas y obtener el consentimiento libre, previo e informado

⁴ En el año 2018, como resultado de la organización y la voluntad de diálogo de los pueblos indígenas de la Amazonía oriental para consolidar su relacionamiento con el Estado y formar parte de él, el Gobierno Nacional expidió el Decreto Ley 632. Esta norma establece los mecanismos y procedimientos para formalizar las Entidades Territoriales indígenas en los departamentos de Guainía, Vaupés y Amazonas. Se trata de un hito para los pueblos indígenas amazónicos en su lucha por el reconocimiento de sus derechos constitucionales. A su vez, la revisión de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial para la inclusión de las Entidades Territoriales indígenas quedó contemplada en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, fruto de los acuerdos logrados entre el Gobierno y los pueblos y autoridades indígenas durante su elaboración.

de los pueblos indígenas en todas las etapas de la elaboración de iniciativas relacionadas con el cambio climático que puedan afectar a sus derechos”⁵

La consulta y obtención del consentimiento vinculante en escenarios de riesgo para los derechos de los pueblos, es el mecanismo de intermediación estatal que debería permitir *“resolver las situaciones de desventaja y desequilibrio de poder a las que se enfrentan los pueblos indígenas en lo que respecta a la capacidad técnica y financiera, el acceso a la información y la influencia política”⁶*.

4. Medidas, mecanismos, esquemas y directrices para garantía de derechos de comunidades étnicas y locales en proyectos REDD+ e iniciativas de mitigación de GEI

4.1. Medidas para superar fallas y problemas identificados en la ejecución de iniciativas de mitigación en territorios étnicos

Este Protocolo describe 16 problemas identificados por la Corte Constitucional en la Sentencia T 248 de 2024 en la ejecución de iniciativas de mitigación en territorios étnicos, y establece medidas de prevención, atención y de seguimiento, cuyo cumplimiento debe ser observado por los actores del mercado del carbono. Las medidas han sido formuladas con base en el marco legal, normativo, lineamientos de política pública y acuerdos internacionales adoptados por Colombia, en estado vigente.

A continuación, se establecen las medidas preventivas, de atención y de seguimiento que aplican para todos los problemas identificados:

Medidas preventivas generales:

Los programas de certificación de GEI y Organismos de Validación y Verificación (OVV) deben incorporar en sus metodologías y procedimientos de validación, verificación y certificación para aplicarse a las iniciativas de mitigación en el territorio nacional, las medidas preventivas de atención y seguimiento presentadas en este Protocolo.

Los *compradores de certificados* de resultados de mitigación deben incorporar estas medidas y requisitos en sus procesos de debida diligencia para la selección de iniciativas de mitigación donde destinar sus inversiones o adquisiciones, así como para seleccionar actores del mercado del carbono con quienes realizan transacciones o acuerdos comerciales.

Los titulares de las iniciativas de mitigación de GEI deberán aportar los soportes y evidencias que acrediten las decisiones adoptadas, cuando a ello haya lugar, para el registro y cambio de fase de la iniciativa en el RENARE, conforme a los términos y lineamientos definidos por el administrador oficial del RENARE.

Medidas de atención generales:

Durante las fases de formulación e implementación, los programas de certificación y Organismos de Validación y Verificación (OVV) deberán incorporar, en sus metodologías y procedimientos de los procesos de verificación, validación y certificación, la revisión de estas *alertas* en el Sistema de Información de Salvaguardas, RENARE y otros sistemas de transparencia de que disponga el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Ministerio del Interior.

⁵ Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas. Informe sobre los efectos del cambio climático y la financiación para el clima en los derechos de los pueblos indígenas. A/HRC/36/46 del 1 de noviembre de 2017. Párr.122.

⁶ Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Informe A/HRC/45/34 del 18 de junio de 2020. Párr. 53.

Medidas de seguimiento generales:

El Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, mediante la implementación del procedimiento formal para que los pueblos indígenas y otros grupos étnicos presenten quejas, reclamaciones y solicitudes en caso de violaciones a sus derechos, cuestión que da alcance a la *orden décimo segunda* de la Sentencia T-248 de 2024, implementará acciones para identificar, prevenir, mitigar y responder a impactos reales o potenciales de las empresas e implementadores sobre los derechos fundamentales de las comunidades étnicas, a saber, a la libre determinación, la autonomía, el autogobierno, el territorio, la identidad y, la integridad física y cultural, en particular a la Consulta Previa y el CLPI; asimismo, para ejercer un control y vigilancia efectivo sobre las actividades de las empresas y actores participantes directa e indirectamente en la ejecución de las iniciativas de mitigación.

Adicionalmente, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible gestionará las alertas tempranas relacionadas con las iniciativas de mitigación generadas por la Defensoría del Pueblo.

Finalmente, adoptando la medida propuesta por la Defensoría del Pueblo en el *Informe Temático Sobre Derechos Étnicos Territoriales, Derechos Ambientales y Bonos de Carbono en Territorios Colectivos Étnicos Retos y Desafíos* (2024), se fortalecerá la articulación y trabajo interinstitucional para atender las inquietudes de los distintos actores asociados a la implementación de las iniciativas de mitigación. Las entidades del orden local y territorial propiciarán las buenas prácticas y el intercambio de experiencias. Además, aprovecharán el espacio generado por la Mesa Permanente de Concertación (MPC) para continuar con los diálogos en el desarrollo de este Protocolo, y otras estrategias implementadas en el marco de la Sentencia T-248 de 2024. En ese orden de ideas, la Procuraduría puede servir de puente, en función preventiva, para el desarrollo de un espacio interinstitucional, liderado por Minambiente para socializar y coordinar todo lo correspondiente a las competencias institucionales en lo que respecta a las salvaguardas sociales y ambientales en el marco de las iniciativas de mitigación.

Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible y Ministerio del Interior, las corporaciones autónomas regionales, los institutos de investigación del SINA y la Defensoría del Pueblo, las personerías, de acuerdo con sus competencias y en coordinación con las autoridades indígenas, realizarán el seguimiento a las iniciativas, de acuerdo con lo establecido en la Estrategia de Seguimiento y Control establecida en la *orden décimo segunda* de la Sentencia T 248 de 2024. Adicionalmente, la Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo, liderará la coordinación y articulación interinstitucional transversal, en el marco del 'Grupo de Trabajo de Salvaguardas', creada por la Comisión Intersectorial de Cambio Climático (CICC). El alcance de este grupo es el fortalecimiento del SNS para la generación de recomendaciones, y la revisión y coordinación de la atención a peticiones, quejas, inquietudes y reclamos que sea presentados ante cualquier entidad – que haga parte del Grupo de Trabajo –, por los pueblos indígenas, las comunidades étnicas, campesinas y rurales, las organizaciones no gubernamentales, las entidades públicas o privadas y la ciudadanía en general, respecto a la formulación e implementación de políticas, programas y proyectos REDD+.

Problema 1. Falta de legitimidad y diálogo con el gobierno propio para los proyectos REDD+

El primer problema identificado en el desarrollo del caso de la Sentencia T-248 de 2024, es que las iniciativas de mitigación no sean conocidos, decididos ni avalados por los integrantes de las comunidades indígenas, a través de su sistema de gobierno propio y con el respeto de su integridad física y cultural. Se trata del no reconocimiento de la máxima autoridad, ni del respeto de su estructura de gobierno propio. Esto tiene consecuencias directas en las comunidades indígenas, ya que genera ruptura de la organización comunitaria, conflictos internos por la falta

de reconocimiento de las autoridades propias, porque llevan al resquebrajamiento del tejido social, así como a una grave amenaza de los derechos fundamentales a la autonomía y autogobierno.

Teniendo en cuenta este problema, a continuación, se identifican medidas preventivas, de atención y seguimiento:

- Identificar y documentar máximas autoridades (MinInterior y comunidad).
- Identificar un mapa de actores y reglas internas claras, con el fin evitar situaciones de coacción y corrupción.
- Verificar vigencia de mandatos y respetar Autoridades Ambientales Tradicionales Indígenas /Consejo Indígena.
- Abstenerse de ofrecer sumas de dinero u otro tipo de recursos o prebendas a miembros de las comunidades étnicas para aprobar decisiones.
- Elaborar protocolos de manejo de conflictos y trazabilidad de decisiones.
- El Ministerio del Interior deberá dar respuesta a las solicitudes de procedencia de consulta previa y realizar acompañamiento institucional. En caso de inconsistencias, podrá adoptar medidas de suspensión del trámite. Cargar en RENARE los soportes de procedencia de consulta previa emitido por DANCP, acuerdos protocolizados de consultas previas, actas, y CLPI.

Problema 2. Medidas contrarias a modos de vida y relación con el territorio

Es innegable la creciente proliferación de actores del sector privado, tanto nacionales como internacionales, que ha generado un nuevo escenario de gobernanza forestal en regiones boscosas como la Amazonía y el Pacífico. La presencia de estos actores privados viene generando cambios en los sistemas de gobernanza forestal y, como señalan Larson & Petkova (2011) y Ulloa (2013), alteran las formas como las comunidades, que dependen y viven de los bosques, gestionan sus territorios. Estos cambios han dado lugar a que se den las condiciones para el desarrollo de conflictos socioambientales latentes y manifiestos, pues allí convergen diferentes visiones, valoraciones y concepciones de gestión del bosque.

Así, las medidas de mitigación y/o actividades del proyecto pueden generar cambios en los usos y costumbres los titulares de los proyectos de manera arbitraria, lo que llevaría a la pérdida de conocimientos y prácticas tradicionales, además de generar conflictos internos y externos por las restricciones en el acceso y control de los recursos forestales por parte de las comunidades étnicas y locales.

Las medidas preventivas, de atención y seguimiento para este problema, son:

- Elaborar un mapeo de derechos y usos consuetudinarios y caracterización sociocultural.
- Compatibilizar el documento de diseño del proyecto con planes de vida/etnodesarrollo; no restringir prácticas ancestrales.
- Asegurar no afectación de procesos ecosistémicos ni saberes tradicionales.
- Generar consulta previa/CLPI cuando aplique; El Ministerio del Interior deberá hacer el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos adoptados.

Problema 3. Falta de debida diligencia del OVV

El caso del proyecto cuestionado de *Baka Rokaire ~la Tir+~Dito*, tratado en la Sentencia T-248-2024, dejó como precedente que la *auditoría de tercera parte* con las comunidades locales se redujo a una reunión en la cabecera departamental y sobrevuelos en el área. Lo cual revela que la verificación y auditoría está omitiendo las salvaguardas sociales y ambientales, al no realizar

una evaluación rigurosa, objetiva e independiente del proyecto, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3° y 44° de la Resolución 1447 de 2018.

Adicional a lo anterior, la auditoría no verificó ni validó quiénes eran *realmente* los participantes del proyecto REDD+ y si se cumplieron las salvaguardas sociales y culturales dispuestas por la Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático - CMNUCC- e incluidas en el Sistema Nacional de Salvaguardas. Algunas de las metodologías dispuestas para las auditorías, aunque incluyen apartados sobre salvaguardas para pueblos indígenas, son flexibles y muy generales, a pesar de que, en varios casos, involucran proyectos para ejecutarse en resguardos indígenas.

Las medidas preventivas, de atención y seguimiento para este problema, son:

- Definir estándares de debida diligencia y requisitos de salvaguardas en acreditación ONAC.
- Proveer información clara y accesible para comunidades.
- Establecer procedimientos públicos (español / Lenguas propias) para validar salvaguardas y gestionar PQRS.
- OVV valida monitoreo y salvaguardas; ONAC habilita canal de PQRS y publica alertas.

Problema 4. Incertidumbre sobre titularidad del proyecto y de certificados de carbono

Uno de los problemas más relevantes identificado en el desarrollo del caso de la Sentencia T-248 de 2024 es el relacionado con la incertidumbre en la titularidad de las iniciativas de mitigación y de los certificados de carbono que de este se desprenden. No es claro que las comunidades indígenas gocen de la titularidad de los proyectos REDD+, sino que su iniciativa y su operación se ejecuta a través de terceros, las cuales son normalmente *empresas desarrolladoras* de proyectos, que determinan la factibilidad, formulación, validación, verificación, certificación, registro y monitoreo.

Las medidas preventivas, de atención y seguimiento para este problema, son:

- El representante de la titularidad de la iniciativa deberá ser parte del Pueblo Indígena, Negro, Afrocolombiano, Raizal y Palenquero o de la comunidad campesina, que haga parte de la comunidad que tenga derecho de propiedad y otros derechos de tenencia sobre el territorio en el que se desarrolla la iniciativa.
- La titularidad de las iniciativas de mitigación preferiblemente, deben estar a nombre de las comunidades, y deberá definirse a través de los mecanismos de gobernanza propias de las mismas.
- El titular de la iniciativa deberá registrarse ante el RENARE.
- La titularidad de los certificados resultados de mitigación se expedirá a nombre del titular de la iniciativa.

Problema 5. Uso inadecuado de contrato de mandato en pueblos étnicas

El fallo de la Corte Constitucional en la Sentencia T-248 de 2024, dejó como precedente que los contratos bajo el derecho privado presentan barreras jurídicas y socioculturales para la plena garantía de derechos para las comunidades étnicas. La falta de claridad en la disposición de elementos relevantes para las comunidades en los contratos de mandato, el uso de conceptos locales de manera arbitraria, cuyos principios son diferentes, sumado al desequilibrio en las negociaciones con agentes en posición dominante, cuestionan la idoneidad de estos contratos en un contexto en el que participan *sujetos de especial protección constitucional* como las comunidades indígenas y sus resguardos.

Las medidas preventivas, de atención y seguimiento para este problema, son:

- Garantizar acuerdos justos y equitativos (consulta/CLPI, participación plena, divulgación en lenguas propias).
- Incluir salvaguardas; reconocer jurisdicción indígena y autoridades ambientales indígenas.
- Construir lineamientos y guías por etapas (preparación, revisión jurídica, consulta interna, firma garantista, seguimiento).
- Rutas para renegociar/anular cláusulas y activar defensas judiciales; reporte a Minambiente/MinInterior.
- Monitoreo de cumplimiento contractual y publicación de casos relevantes.

Problema 6. Falta de debida diligencia del desarrollador/aliado técnico

La Sentencia T-248 de 2024 señala que las actuaciones en contra de la debida diligencia de los desarrolladores han vulnerado los derechos humanos de las comunidades indígenas involucradas, exacerbando tensiones internas y omitiendo salvaguardas sociales y ambientales clave. Es evidente que existen asimetrías de poderes y capacidades entre quienes participan de este mecanismo: normalmente los desarrolladores tienen mayores capacidades económicas, legales y técnicas que las comunidades étnicas. Es preciso señalar que este tipo de actividades debería integrar la preservación y conocimiento ancestral, lo que suele ser desconocido y se ve representado en figuras de contrato las cuales pueden ser injustas (Fundación Gaia Amazonas, 2023).

Las medidas preventivas, de atención y seguimiento para este problema, son:

- Garantizar la corresponsabilidad en salvaguardas, derechos humanos y la debida diligencia.
- Realizar una valoración o evaluación participativa de los posibles impactos sociales, ambientales y en los derechos humanos desde fase de factibilidad.
- Dar acceso a información completa (en lenguas propias), conectividad y acceso a RENARE/registros.
- Identificar autoridad/consulta previa.
- Fomentar la transparencia en la información financiera del proyecto, experiencia en el mercado, adecuado relacionamiento con otras comunidades e incorporación de los principios que establezcan un modelo claro y explícito de distribución de beneficios.
- Actualizar evaluaciones e implementar PQRSD en el que se prioricen las quejas de comunidades.
- Conformar equipo veedor para PQRSD con el fin de generar alertas sobre riesgos de derechos fundamentales y generar ruta que ponga en conocimiento a defensoría y autoridades competentes.

Problema 7. Falta de debida diligencia de programas de certificación

Las *empresas certificadoras* son las encargadas de diseñar la metodología a aplicarse y de emitir la certificación de porcentaje de carbono; sin embargo, no en todos los casos, estas diseñan y ejecutan acciones que garanticen el respeto y abordaje de las salvaguardas a favor de los pueblos indígenas (Camacho et al., 2017). Se identifican elementos sustanciales de este problema como,

por ejemplo, la falta de verificación por parte del programa certificador sobre si el proyecto cumplía con las salvaguardas mínimas de iniciativas de mitigación operado en territorios indígenas.

Las medidas preventivas, de atención y seguimiento para este problema, son:

- Establecer políticas/herramientas propias de salvaguardas y reparación.
- Exigir registro/implementación en RENARE para emitir certificados.
- Generar canales claros de respuesta y consultas públicas difundidas a pueblos étnicos y autoridades.
- Definir mecanismos de reparación justas e integrales cuando haya daños; publicación de resultados.
- Difusión de consultas públicas de las iniciativas de mitigación entre los actores relevantes.

Problema 8. Fallas en mecanismos de participación

Existen problemas ligados a los derechos de participación plena y efectiva de las comunidades étnicas, debido a que los procesos están ocurriendo posteriormente a la implementación de los proyectos en donde, en algunos casos, la información suministrada no es suficiente y débilmente documentada. Se presentan situaciones como: la falta de consulta a todos los integrantes de la comunidad; la realización de procesos de socialización y participación en lugares diferentes al área de desarrollo del proyecto y solo con algunos de los líderes; y los procesos consultivos no comienzan a ejecutarse de forma previa a la implementación de las iniciativas de mitigación, sino con posterioridad a la suscripción de acuerdos comerciales, generalmente de mandato.

Las medidas preventivas, de atención y seguimiento para este problema, son:

- Realizar diálogos abiertos y amplios desde la factibilidad para tomar de decisiones.
- Generar un diagnóstico sobre el estado actual y los derechos de las comunidades,
- Contar con un plan de fortalecimiento intercultural (incluye MRV y salvaguardas).
- Desarrollar un protocolo de acceso a justicia ambiental y acompañamientos externos.
- Establecer un canal de comunicación y rendición de cuentas.
- Realizar consulta previa/CLPI o participación ampliada según procedencia.
- Monitorear indicadores de participación y actualizar materiales/protocolos.

Problema 9. Falta de reglamentación del mercado y salvaguardas con enfoque étnico

La Corte Constitucional en la Sentencia T-248/24, señala que los actores privados han llenado autónomamente la falta de reglamentación proveniente del Estado colombiano, que no armoniza las garantías sociales, ambientales y culturales, obligatorias por la ley y la Constitución. Por tanto, es de vital importancia que el Estado establezca una reglamentación en la materia, que, adicionalmente, permita el sometimiento a la justicia de los que infrinjan derechos humanos. La reglamentación que se presente debe fomentar un enfoque integral del territorio y reconocer el papel que juegan las comunidades en la conservación de los bosques, puesto que sus prácticas tradicionales han mantenido las condiciones ecosistémicas óptimas.

Las medidas preventivas, de atención y seguimiento para este problema, son:

- Elaborar norma y protocolo con perspectiva étnica por Minambiente, realizar consulta pública y consulta previa. Esta norma debe incorporar Salvaguardas Sociales y Ambientales, conceptos técnicos (adicionalidad, doble contabilidad, traslapes) y regulación sobre roles de actores.

- Reglamentar SIS para reporte y verificación de SSA de proyectos REDD+.

Problema 10. Insuficiencia e inoperatividad de RENARE

El Registro Nacional de Reducción de Emisiones y Remoción de Gases de Efecto Invernadero (RENARE) es el sistema de información oficial que permite registrar por “(...) *Toda persona, natural o jurídica, pública, privada o mixta que pretenda optar a pagos por resultados, o compensaciones similares, incluyendo transferencias internacionales, o que pretenda demostrar resultados en el marco del cumplimiento de las metas nacionales de cambio climático establecidas bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático - CMNUCC-, como consecuencia de iniciativas de mitigación que generen reducción de las emisiones y remoción de gases de efecto invernadero -GEI- en el país (...).*”⁷ El RENARE fue creado por el artículo 175 de la Ley 1753 de 2015, modificado posteriormente por el artículo 230 de la Ley 2294 de 2023 y reglamentado mediante la Resolución 1447 de 2018. Inicialmente, desde su creación, el RENARE fue administrado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM, como parte del Sistema de Información Ambiental de Colombia (SIAC), y desde la expedición de la Resolución 418 del 15 de abril de 2024, su administración, seguimiento y control recae directamente por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, bajo la coordinación de la Dirección de Cambio Climático y Gestión del Riesgo.

Durante los años 2022 – 2024 el funcionamiento de la plataforma RENARE fue suspendido por una orden judicial. Adicionalmente, según el caso de la Sentencia T-248 de 2024, existen dificultades para que las partes accedan de manera clara a la guía para su operación, como lo ordena el artículo 53º de la Resolución 1447 de 2018. Adicionalmente existe una insuficiencia en la capacidad que se tiene por su interoperabilidad con el Sistema de Información de Salvaguardas Sociales y Ambientales, debido a que el RENARE no valora su cumplimiento. Todo esto ha ocasionado que, en el territorio, los aliados técnicos y titulares no estén obligados a actualizar su información, una vez registrados por primera vez, no se reporte la información completa y se excusen en debilidades técnicas por la inacción del gobierno.

Ante esta situación, y con el fin de garantizar la protección de derechos colectivos y los principios de integridad ambiental, se adelantaron las siguientes medidas preventivas, de atención y seguimiento:

- En abril de 2024 se expidió la Resolución 418 de 2024, mediante la cual se reglamenta la administración del RENARE, asignando al Ministerio de Ambiente las funciones de seguimiento y control.
- En noviembre 2024 el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la Circular 10002024E4000134, la cual establece lineamientos transitorios y obligaciones mínimas sobre el cumplimiento, implementación y demostración de salvaguardas sociales y ambientales, mientras avanza la reglamentación formal en la materia. Dicha circular va dirigida a los “*Titulares de las iniciativas, Organismos de Validación y Verificación de GEI, comunidades indígenas, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras y demás actores relacionados de manera directa e indirecta con proyectos del tipo REDD+.*”
- En julio de 2025 el Ministerio adelantó la reactivación gradual del RENARE, una vez finalizada la migración de información y data de todos los registros consignados en este sistema, inicialmente en la fase de factibilidad. Esta reactivación, aunque parcial, cumple una función esencial de restablecer el registro oficial de iniciativas; permite la identificación

⁷ Artículo 230 de la Ley 2294 de 2023, que modificó al artículo 175 de la Ley 1753 de 2015.

geográfica, temporal y tipológica de los proyectos, y habilita controles mínimos frente a riesgos de doble contabilidad y traslapes.

- Desde la reactivación de la plataforma en junio de 2024, se ha continuado con las funciones establecidas principalmente en las resoluciones 1447 de 2018 y 418 de 2024, vinculadas directamente con la gestión y control del RENARE, en tanto se adelanta paralelamente el desarrollo de la plataforma tecnológica de dicho sistema. Lo anterior a través de los canales oficiales del IDEAM y Ministerio de Ambiente.

Problema 11. Falta de claridad en la distribución de beneficios

La falta de claridades en cuanto a forma en la que se genera la distribución de los beneficios, ha permitido que se presenten situaciones en las cuales no se produce una distribución equitativa de los recursos, pues no se hace de manera acorde con las cargas y roles de cada parte en el marco del desarrollo de la iniciativa; con lo cual, se ha encontrado como necesaria la formulación de garantías para que los beneficios generados en el proceso de desarrollo del proyecto efectivamente llegue a las comunidades de manera proporcional a su rol protagónico en la iniciativa (WWF Colombia y CCAP, 2024).

Las medidas preventivas, de atención y seguimiento para este problema, son:

- Concertar un plan de distribución de Beneficios mediante el cual el titular de una iniciativa de mitigación identifique, acuerde, documente e implemente los mecanismos para la asignación, gestión, entrega y seguimiento de los beneficios derivados de la iniciativa, de conformidad con las contribuciones, responsabilidades y riesgos asumidos por los actores involucrados.
- Cuando proceda, el plan de distribución de beneficios deberá incluirse en la protocolización de consulta previa y/o consentimiento previo libre e informado, en los eventos en que la iniciativa se desarrolle en territorios con presencia de comunidades étnicas.
- Establecer informes técnicos y financieros sobre la distribución de beneficios de conformidad con los periodos de acreditación de la iniciativa.
- Se recomienda que los recursos de las iniciativas de mitigación GEI, sean *administrados a través de fiducias*, las cuales deben ser *independientes*.
- Definir el componente económico del plan de Distribución de Beneficios, que considere formas de asignación y distribución de beneficios de ganancias que permita una distribución justa de las ganancias netas de la iniciativa de mitigación
- Establecer planes de seguimiento e interventoría, PQRS y canales de información a Minambiente/OVV/ONAC, para puesta en conocimiento de inconsistencias.
- Realizar rendición de cuentas sobre flujos y fuentes; OVV verifica alineación con plan de distribución de beneficios.

Problema 12. Falta de resolución de PQRS

La problemática identificada por la Corte Constitucional en la Sentencia T-248 de 2024, se genera principalmente por la inexistencia de un sistema de atención de PQRS por parte de los actores de las iniciativas y, a que en los pocos casos en que existen, han resultado no ser funcionales ni operativos; no obstante, es claro que estos sistemas deben operar con diligencia debida y transparencia, además de establecer mecanismos de reclamación apropiados, independientes y culturalmente adecuados.

Las medidas preventivas, de atención y seguimiento para este problema, son:

- Los actores deberán definir un sistema interno y externo de reclamaciones con plazos de acuerdo con la Ley 1755/2015 con criterios y canales de divulgación.
- El estado deberá implementar y mantener las condiciones para que se puedan atender peticiones relativas a posibles faltas en el proceso de respuestas a peticiones por parte de los titulares de las iniciativas de mitigación de GEI o los aliados técnicos de éstas.
- Resolver la petición, queja o reclamo, de forma interna, con información clara y culturalmente adecuada. En caso de que no se logre la resolución del conflicto, se buscará la mediación de terceros o el acompañamiento institucional. Y en aquellos casos en los que no se logre una solución del conflicto, se deberá recurrir a la vía judicial correspondiente.
- Realizar análisis y seguimiento de reclamaciones, por parte de OVV para determinar si atendió las peticiones de una manera clara, oportuna y comprensible.

Problema 13. Falta de información y transparencia

La problemática de la falta de información y transparencia identificada por la Corte Constitucional en Sentencia T-248 de 2024, se encuentra relacionada con circunstancias asociadas a la dificultad que presentan las comunidades para acceder a los documentos en los que se soportan las iniciativas de mitigación de GEI, con sustento en razones de *confidencialidad*. La problemática que está relacionada, también, con que el Pueblo indígena, Negro, Afrocolombiano, Raizal, Palenquero o comunidad campesina, en su territorio no siempre conoce las iniciativas de mitigación, ni en qué fase se encuentran, aun cuando ya cuenten con proyectos formulados e, incluso, en proceso de implementación, con lo cual, carecen de un proceso de valoración o diagnóstico sobre las afectaciones o incidencia directa a los territorios y comunidades.

Las medidas preventivas, de atención y seguimiento para este problema, son:

- Generar información clara, oportuna y traducida a lenguas propias en todas sus fases y entregar de reportes sobre el estado de avance de la iniciativa incluyendo estados financieros, contables y documentos contractuales, que sea de acceso a todas las partes.
- Realizar la caracterización social, étnica, económica y cultural existente en el territorio y adelantar un informe sobre la identificación de los riesgos económicos, naturales y antropogénicos probables durante la vida del proyecto.
- Hacer públicos reportes periódicos sobre el precio al que se venderán sus créditos y solicitar aprobación para su venta por parte de la comunidad.
- Evitar adelantar acciones constitutivas de manipulación, ofrecimiento y entrega de prebendas, el ejercicio de coacción y/o engaño dirigido a controlar o dirigir la voluntad y el consentimiento de los actores interesados
- Para el cambio de fase en RENARE se deberá presentar los soportes de divulgación de la información relacionada con las condiciones y lineamientos con las comunidades que son objeto de afectación directa por la iniciativa de mitigación de gases efecto invernadero.

Problema 14. Falta de seguimiento, vigilancia y control

La Corte Constitucional, en la Sentencia T-248 de 2024, identificó la ausencia de elementos de seguimiento, vigilancia y control a los actores del mercado, que afecta los derechos de las comunidades indígenas que intervienen en el mercado de carbono, con lo que se permite la generación de un ambiente propicio para que se presenten problemas de calidad de los certificados de carbono que se comercia, puesto que no se desarrollan medidas de seguimiento, vigilancia y control a los formuladores de las iniciativas por parte de los OVV, ni a los OVV mismos,

cuando tienen faltas en el desarrollo de sus actividades de validación y verificación de las iniciativas de mitigación de GEI.

Las medidas preventivas, de atención y seguimiento para este problema, son:

- El Minambiente aprovechará el Sistema de Transparencia (MRV-RENARE, ROE, SIS) para asegurar que la información del mercado de carbono sea públicamente accesible, precisa y consistente. Realizar revisión SIS como requisito de fase-
- Realizar informes de debida diligencia empresariales.
- Desarrollar formación y acompañamiento interinstitucional cuando se solicite.
- El Minambiente deberá generar espacios de coordinación con otras instituciones públicas que pueda llegar a tener competencia en las temáticas asociadas a las iniciativas de mitigación de GEI.

Problema 15. Fallas de ONAC como acreditador de OVV

La Corte Constitucional en la Sentencia T-248 de 2024, identifica que posteriormente a la acreditación inicial, no se evidencia por parte del Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (ONAC) un proceso de seguimiento efectivo al cumplimiento de estándares mínimos de operación; por ejemplo, en casos de falta de independencia o de fallas en los procesos de auditoría, según las normas que los rigen. El ONAC tampoco publica información transparente sobre los organismos acreditados para la auditoría de iniciativas de mitigación de GEI.

Las medidas preventivas, de atención y seguimiento para este problema, son:

- Reglamentar el proceso de acreditación de OVV en Colombia, a través del ONAC, que deberá incluir los requisitos mínimos y el abordaje de SSA.
- Publicar listado trimestral de OVV acreditadas y sus condiciones.
- Establecer canal PQRSD del ONAC y alertas.

Problema 16. Ausencia de garantía y cumplimiento de consulta previa y CLPI

La ausencia del respeto y garantía del derecho a la consulta previa y consentimiento libre, previo e informado (CLPI) se ha generado por parte de quienes fungen como aliado técnicos o desarrolladores de las iniciativas de mitigación por el no desarrollo de las acciones de cumplimiento del procedimiento dispuesto para el efecto y por las mismas comunidades que, alegando actuar en ejercicio de su autonomía y mediante el acompañamiento de terceros, afirman que no requieren adelantar un proceso de consulta previa por tratarse de una iniciativa propia. La normativa existente no ha generado claridad en cuanto a la fase de la iniciativa en la que se debe exigir el cumplimiento de la consulta previa y CLPI, ni existen claridades en cuanto al procedimiento que opera en los casos en los que la titularidad del proyecto recae en la comunidad y ésta alega su falta de interés en la consulta previa.

Las medidas preventivas, de atención y seguimiento para este problema, son:

- Solicitar a Dirección de Autoridad Nacional de Consulta Previa - DANCP (Mininterior) concepto de procedencia de la consulta previa.
- Los documentos soporte deberán ser cargados en RENARE. Si no procede la CLPI, el Estado actúa como garante en procesos participativos.
- En caso de proceder la consulta previa/CLPI debe realizarse de buena fe y culturalmente adecuada, con costos a cargo del titular/aliado técnico, en coordinación con la DANCP y

acompañamiento del Ministerio Público, cuyo soporte será el acto administrativo de protocolización de los acuerdos de consulta o aquel instrumento en el marco de las competencias del Ministerio de Interior, el cual deberá remitirse ante el RENARE para el cambio de fase de formulación a implementación.

- MinInterior y titulares monitorean compromisos asumidos en el marco de la Consulta Previa y el Consentimiento Libre, Previo e Informado. El SIS exige soportes de espacios participativos, protocolización de los acuerdos y CLPI y oficia a MinInterior ante dudas.

4.2. Mecanismos para determinar la titularidad de proyectos REDD+ en territorios indígenas, ya sea que su operación recaiga directamente en la comunidad indígena o en un actor externo, socio o intermediario

Este apartado se realiza con base en el documento Lineamientos para la Formulación E Implementación de Proyectos REDD+ en el Mercado Voluntario de Carbono de los Gobiernos Indígenas, el cual fue entregado por parte de la Mesa Permanente de Concertación (MPC) al Ministerio de Ambiente. A partir de este se incorporan los aspectos relacionados con la toma de decisiones sobre implementar o no proyectos REDD+ en los territorios indígenas, condiciones y requisitos, amparados bajo los derechos de libre determinación y gobierno propio.

Según este documento, es importante resaltar que, las autoridades territoriales indígenas a través de la Asamblea General serán las instancias máximas de decisión en el desarrollo de los proyectos REDD+, garantizando la gobernanza y el manejo autónomo de sus territorios. Estas autoridades, conforme a sus sistemas organizativos, de representación y toma de decisiones, dirigirán y supervisarán todas las fases del proyecto, asegurando que se respeten sus derechos, cosmovisión y principios tradicionales en la gestión de los recursos naturales y territoriales.

- *Autoridad Tradicional:* Es la persona que, por los sistemas de conocimiento propio del territorio, se encarga de orientar y manejar desde la espiritualidad para garantizar una adecuada administración del territorio, que se refleja en un debido direccionamiento social, cultural, ambiental y económico.
- *Autoridad Administrativa:* Es la persona(s) que se elige por un periodo determinado para representar administrativa y jurídicamente a los territorios indígenas Ejm: El Cabildo.
- *Asamblea General:* Es el espacio donde participan las autoridades Tradicionales, Administrativas y comunidades en general, con la finalidad de avalar las propuestas presentadas por el equipo de trabajo indígena para desarrollar las actividades de formulación e implementación del Proyecto REDD+.

El mecanismo para determinar la titularidad de un proyecto REDD+, debe partir de comprender que esta, además de garantizar derechos, implica la adquisición de deberes y obligaciones. Por lo cual, desde Minambiente, se proponen, de manera complementaria al mecanismo establecido por la MPC, un listado de los derechos, deberes y obligaciones de los titulares de los proyectos REDD+, para que se tenga claridad sobre las implicaciones que tiene el ejercicio de la titularidad sobre este tipo de iniciativas, y qué implicaciones contrae la misma, en términos financieros y de capacidades técnicas.

Lo anterior, resulta esencial para que las comunidades e individuos particulares puedan determinar en qué fases o para qué actividades, en concreto, requerirán el acompañamiento de un aliado técnico y en qué calidades encuentran oportuno el relacionamiento con éste. En este punto, es importante resaltar que, si bien la titularidad no es objeto de, sí es dable desarrollar

procesos de acuerdo, consultoría o en asociatividad, para que por intermedio de un tercero experto, idóneo y cualificado se desarrollen cierto tipo de actividades de las fases de la iniciativa.

En el caso de que, el proyecto REDD+ se encuentre asociada al carbono forestal, sin perjuicio de las labores del aliado técnico, que sean establecidas por el titular, el aliado técnico será corresponsable del cumplimiento de las salvaguardas sociales y ambientales y de garantizar la debida diligencia.

Paso 1: Socialización de las iniciativas propias de proyectos en los territorios:

Los proyectos REDD+ deben de ser resultado del consenso interno liderado por las Autoridades Tradicionales, Administrativas y Asamblea General, acorde a las prácticas y formas propias de toma de decisiones de cada Pueblo Indígena, Negro, Afrocolombiano, Raizal o Palenquero o comunidad campesina. Como primera instancia será deber de los líderes y sus instituciones representativas, conforme la estructura de gobierno de cada territorio informar a las autoridades sobre el origen, las condiciones y lineamientos de los proyectos REDD+ en territorios indígenas.

Los derechos de los titulares de la iniciativa de mitigación son:

1. Ser sujetos de especial protección de las Salvaguardas Sociales y Ambientales.
2. Ser consultados sobre su aprobación para la venta de los créditos de carbono; cuando la operación de la iniciativa de mitigación de GEI se desarrolle a través de la figura de aliado técnico de la iniciativa de mitigación de GEI, éste deberá informarles sobre quién será el usuario final, así como sobre el precio al que se venderán los certificados de reducción y remoción de GEI y lo que se descontará de los costos de formulación e implementación de la iniciativa.
3. Ante la presencia de inconsistencias y/o vulneraciones a las Salvaguardas Sociales y Ambientales, el pueblo indígena, negro, afrocolombiano, raizal o palenquero o comunidad campesina, en cualquier fase de la iniciativa de mitigación de GEI, puede emitir un informe de los hechos para su revisión ante el ONAC, el OVV o el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible; lo anterior, podrá remitirse también con copia a los entes de control y demás entidades competentes.
4. En caso de que el aliado técnico de la iniciativa de mitigación de GEI eleve una solicitud de *renuncia al trámite* de validación y/o verificación, éste deberá contar con la autorización del pueblo indígena, negro, afrocolombiano, raizal o palenquero o comunidad campesina y, en caso de que la comunidad no esté de acuerdo con la renuncia, ésta podrá emitir un pronunciamiento de oposición ante el OVV.
5. El respeto al conocimiento tradicional en la formulación e implementación de iniciativas de mitigación de GEI.
6. Derecho al acceso a la información sobre las iniciativas de mitigación de GEI que se pretenden o se desarrollan en sus territorios.
7. Al respeto de sus derechos de libre determinación, autonomía, autogobierno, territorio, identidad, integridad física y cultural, consulta previa y consentimiento libre, previo e informado, en el marco del desarrollo de las iniciativas de mitigación de GEI

Las responsabilidades de los titulares de la iniciativa de mitigación son:

1. Respetar las estructuras de gobernanza y gobierno propio de los pueblos étnicos o comunidades campesinas que puedan estar directa o indirectamente involucradas con la iniciativa de mitigación de GEI, con lo cual, ante el conocimiento de la posibilidad de implementación de una iniciativa de mitigación de GEI en sus territorios, las comunidades

deberán convocar una reunión de tipo asamblea, con presencia de la mayoría de las personas de la comunidad que conforme su estructura de gobierno propio, para poner en su conocimiento la posibilidad del desarrollo de la iniciativa de mitigación y consultar si se encuentran o no interesados en escuchar la propuesta, ya sea por parte de los terceros oferentes o de los miembros de la misma comunidad.

2. Convocar a toda la comunidad que conforme su estructura de gobierno propio, para el proceso de información, deliberación y acuerdos concertados para el desarrollo de una iniciativa de mitigación. Verificar que los contratos y/o acuerdos que sean objetivo de aprobación por el pueblo indígena, negro, afrocolombiano, raizal o palenquero o comunidad campesina para el desarrollo de unas iniciativas de mitigación de GEI, sean concordantes con su plan de vida o instrumento de ordenamiento territorial correspondiente, para lo cual, podrá solicitar apoyo de la autoridad territorial correspondiente.
3. Solicitar la procedencia de la consulta y/o consentimiento, previo libre e informado, ante la autoridad competente (Ministerio del Interior), y en caso de procedencia, adelantar los procesos consultivos acorde a cada pueblo, como garantía de su participación, conforme a la estructura propia organizativa y comunitaria.
4. Solicitar el acompañamiento del Ministerio del Interior y/o la Defensoría del Pueblo y/o la Procuraduría General de la Nación, en los procesos de información, deliberación y toma de decisiones que se adelanten con terceros, en el marco de una iniciativa de mitigación de GEI, como garantes de la defensa de sus derechos fundamentales.
5. Poner en conocimiento de las autoridades territoriales y/o ambientales competentes cualquier actuación que atente contra los derechos fundamentales o colectivos de las comunidades étnicas o locales, en el área de implementación de una iniciativa de mitigación de GEI.
6. Hacer seguimiento y monitoreo a la iniciativa de mitigación de GEI que se implemente en su territorio, en todas sus fases, a efectos de lo cual podrá contar con el acompañamiento del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
7. Los representantes del pueblo indígena, negro, afrocolombiano, raizal o palenquero o comunidad campesina que suscriban acuerdos y/o contratos con terceros para el desarrollo de iniciativas de mitigación, deberán adelantar los procesos de consulta y autorización que sean exigidos por los usos y costumbres de su comunidad, atendiendo a su auto gobierno y estructura propia organizativa y comunitaria.

Las obligaciones de los titulares de las iniciativas y del aliado técnico de la iniciativa son:

1. Dar cumplimiento a los criterios exigidos en la reglamentación de salvaguardas sociales y ambientales que expida el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
2. Cumplir con los ejercicios de consulta y toma de decisiones propios de cada comunidad, antes de suscribir cualquier tipo de contrato o acuerdo en el marco de desarrollo de iniciativas de mitigación de GEI, los cuales deberán estar precedidos por espacios amplios de información, deliberación y participación.
3. Priorizar la destinación de recursos obtenidos de esta iniciativa, para el cumplimiento de objetivos de interés colectivo fijados por el pueblo indígena, negro, afrocolombiano, raizal o palenquero o comunidad campesina, a través de sus instancias de toma de decisión.
4. Definir medidas para prevenir y afrontar las posibles amenazas sobre la integridad cultural y autonomía de los pueblos y del pueblo indígena, negro, afrocolombiano, raizal o palenquero o comunidad campesina; evitando la fragmentación de las unidades comunitarias existentes.
5. Registrar en el RENARE la iniciativa de mitigación de GEI y reportar información de esta en cada fase y periódicamente, según lo establecido en el artículo 175 de la Ley 1753 de 2015, modificado por el artículo 230 de la Ley 2294 de 2023 y reglamentado mediante la Resolución 1447 de 2018, o aquella que la modifique o sustituya.

6. Adelantar las acciones de Monitoreo, Reporte y Verificación (MRV), en lo relativo al cumplimiento de las Salvaguardas Sociales y Ambientales, dando cumplimiento a lo dispuesto en la reglamentación relacionada que expida el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible.
7. Realizar procesos de fortalecimiento de capacidades del pueblo indígena, negro, afrocolombiano, raizal o palenquero o comunidad campesina, previo al desarrollo de cualquier proceso de socialización de la iniciativa o suscripción de acuerdos.
8. Adelantar una evaluación exhaustiva de las comunidades étnicas o locales con quienes se pretende adelantar la iniciativa de mitigación de GEI, identificando el área geográfica en donde se adelantará la iniciativa y las comunidades étnicas o locales que habitan el territorio en el que se espera implementar la misma.
9. Identificar y caracterizar la diversidad social, étnica, económica y cultural existente en el territorio en el que se implementará la iniciativa y sus formas de relacionamiento, así como de sus estructuras de gobernanza y formas de autogobierno.
10. Identificar las comunidades que, si bien no pertenecen al desarrollo de la iniciativa de mitigación, sí podrían tener algún grado de afectación por el desarrollo de esta, así como la ubicación geográfica de la iniciativa.
11. En el marco de la negociación del acuerdo que se pactará con la comunidad para el desarrollo de la iniciativa de mitigación de GEI en territorios colectivos, el titular de la iniciativa deberá adelantar un ejercicio de aprobación de tipo asamblea con la participación de todos o de la mayoría de sus miembros; tal aprobación deberá constar en documento que deberá hacer parte integral del contrato que se suscribe.
12. Armonizar la iniciativa de mitigación de GEI con el plan de vida o instrumento de ordenamiento territorial correspondiente para el territorio objeto de implementación.
13. Abstenerse de formular el desarrollo de cualquier tipo de actividad que vaya en contravía del plan de vida o instrumento de ordenamiento territorial correspondiente para el territorio objeto de implementación o pueda poner en riesgo los usos, tradiciones y costumbres de la comunidad étnica o local.
14. Surtir el proceso de la Consulta Previa y/o Consentimiento Previo, Libre e Informado en los casos en que sea procedente, según el concepto de la Dirección de Autoridad Nacional de Consulta Previa (DANCP) del Ministerio del Interior, así como de los demás mecanismos de participación aplicables, en el marco del gobierno propio de la comunidad étnica que pretenda desarrollar una iniciativa de mitigación de GEI.
15. Garantizar que la información referente a las iniciativas de mitigación de GEI, en todas sus fases sea pública y accesible para el pueblo indígena, negro, afrocolombiano, raizal o palenquero o comunidad campesina con la que se haya surtido el acuerdo, en el cual se deberá establecer la periodicidad de entrega de reportes sobre el estado de avance de la iniciativa en todas sus fases, lo que incluirá, costos de las actividades de las iniciativas, estados financieros, contables y documentos contractuales, trámites ante terceros como los OVV, o programa de certificación, entre otros; precio de venta de los certificados ante la comunidad;
16. Deberá contar con un sistema de atención a las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias (PQRSD), las cuales deberán ser atendidas en los establecidos en la Ley 1755 de 2017, priorizando aquellas que sean radicadas por la comunidad con presencia en el área de implementación de la iniciativa de mitigación.
17. Deberá garantizar que el documento técnico de la iniciativa, toda la información escrita, acuerdos o estudios generados, se redacten en español en un lenguaje comprensible y en lengua propia; además deberá acompañarse de documentos y materiales dirigidos a la comunidad en donde se explique su contenido en un lenguaje claro, empleando recursos gráficos, pedagógicos, audiovisuales entre otros.

18. Presentar la identificación de los riesgos naturales y antropogénicos probables durante la vida del proyecto, con la descripción de las medidas necesarias para mitigarlos y los procedimientos que se implementarán para su monitoreo y seguimiento.
19. Garantizar los derechos de autor, y dar reconocimiento a los actores involucrados, incluyendo a las mujeres, respetando el conocimiento tradicional en el desarrollo de cualquier investigación o estudio que se realice antes, durante y con posterioridad al establecimiento de la iniciativa.
20. Respetar y reconocer la cosmovisión, la cosmología y el uso y apropiación cultural de los recursos del pueblo indígena, negro, afrocolombiano, raizal o palenquero o comunidad campesina, su forma de relacionarse con el territorio, sus símbolos, su lenguaje y sus instituciones formales o informales de estructuras económicas locales ya existentes y el papel de las mujeres en ellas.
21. No deberá involucrarse en ninguna forma de discriminación, violencia o acoso sexual.
22. En el marco de la evaluación de la conformidad y en caso de que la titularidad de la iniciativa de mitigación de GEI recaiga sobre el aliado técnico, el pueblo indígena, negro, afrocolombiano, raizal o palenquero o comunidad campesina, deberá fungir como parte del contrato que se suscriba con el OVV, para adelantar la evaluación de la conformidad respectiva (validación y/o verificación, según sea el caso).

Paso 2: Consulta interna y/o consentimiento cultural y Análisis Interno del Pueblos étnicos.

Consiste en la revisión interna de la idea de proyecto o del proyecto REDD+ a implementar, en Asamblea General del territorio, para la aceptación o negación de la intención del proyecto o del proyecto, la cual se manifestará como resultado del análisis que se realice de los principios culturales de cada Pueblo indígena, Negro, Afrocolombiano, Raizal, Palenquero o comunidad campesina. Este análisis podrá estar orientado en relación de los procesos, directrices y documentos organizativos como planes de vida y de etnodesarrollo afines que orientan la política integral de administración del territorio colectivo. Así, la Asamblea General con participación de los dueños y vivientes de los territorios, y las distintas instancias representativas, manifestarán el interés de llevar a cabo o no la iniciativa REDD+.

Paso 3: Búsqueda y selección de aliado(s) técnico(s):

Una vez surtidos los pasos 1 y 2, las comunidades interesadas podrán determinar en qué fases y para qué actividades se requiere (o no) el acompañamiento en términos técnicos y financieros de un tercero (empresa, aliado técnico, desarrollador). Para ello, una vez se tenga la manifestación de la intención de llevar a cabo la iniciativa, se designará a las Autoridades para iniciar los diálogos de acercamiento con diferentes aliados técnicos que se ajusten a las particularidades y decisiones de los Territorios Indígenas.

Una vez identificados los posibles aliados técnicos, estos deberán ir a territorio para socializar y presentar la ruta para el desarrollo de los proyectos REDD+. Después del primer acercamiento entre los Pueblos Indígenas y los Aliados Técnicos, corresponde a los Pueblos Indígenas deliberar de manera autónoma, sin interferencias externas y en un tiempo prudente la selección del Aliado Técnico. Este proceso debe realizarse en espacios autónomos, respetando su autogobierno y autodeterminación, asegurando que la decisión se base en la información proporcionada, así como en la claridad y transparencia de la misma.

Una vez tomada la decisión en Asamblea, en la que se debe asegurar la pluralidad de información y la claridad de las metodologías de trabajo de los Aliados Técnicos, incluyendo el enfoque que permita fomentar la transparencia, confianza mutua y el buen entendimiento entre todas las partes

involucradas, se seleccionará al aliado que cumpla con los requisitos definidos y se procederá a su selección en espacio autónomo, para el posterior inicio de la ruta de trabajo. Se deberán surtir los espacios de socialización comunitaria solicitadas por las autoridades en territorio hasta lograr un consenso de la población indígena frente a la claridad de la iniciativa que van a desarrollar, garantizando la construcción conjunta, la buena fe, debida diligencia empresarial y la capacidad del diálogo intercultural; se debe de incluir la traducción, la interpretación y análisis de la información transmitida por las partes para el conocimiento de las etapas, los mecanismos, los alcances de la iniciativa para que sea culturalmente adecuada a cada pueblo indígena según su cultura.

Paso 4: Definición del vínculo legal distribución de recursos y ruta de trabajo.

Una vez definido el Aliado técnico, los Pueblos indígenas deben notificar a través de un documento, el interés de iniciar las gestiones correspondientes para el desarrollo de la iniciativa REDD+, y así propondrán la fecha y lugar en el territorio indígena, y el presupuesto para la logística que permita realizar la reunión entre las partes, la cual estará a cargo del Aliado técnico. Aceptada la propuesta por parte del Aliado Técnico, se confirma la realización de la Asamblea General en territorio, en la cual, se definirá el vínculo jurídico, el porcentaje de participación entre las partes, y la ruta de trabajo. Dando inicio a la ejecución del proyecto en sus diferentes fases, comenzando por la formulación.

Posteriormente, se deben llegar a la decisión interna sobre las formas y los términos en los que se espera desarrollar el vínculo jurídico con el aliado técnico, a través de contratos o acuerdos. Si la comunidad indígena lo decide de esta manera, podrá solicitar el acompañamiento de Minambiente o Mininterior, Defensoría del Pueblo, o de otro tipo de asesoría a través de ONG u otras organizaciones, que puedan actuar como garantes de derechos de los Pueblos Indígenas.

4.3. Mecanismo para determinar las actividades y objetivos de los proyectos REDD+, sin afectar sus modos de vida, bajo una perspectiva de acción sin daño y asegurando acciones de conservación y preservación ambiental

Este mecanismo tiene como objetivo construir los proyectos, en conjunto con las comunidades, de manera que su implementación respete sus derechos, sin afectar sus modos de vida, y bajo una perspectiva de *acción sin daño*, promoviendo las acciones de conservación y preservación ambiental.

Se aclara, que este mecanismo y las metodologías aquí propuestas, pretenden ser un referente y no un esquema inflexible, al contrario, se invita a adaptar esta metodología a cada caso, al contexto, requerimientos y condiciones de las comunidades y territorios.

El enfoque de acción sin daño

Trata de reconocer y analizar los daños que ocasionan las situaciones de intervención de agentes externos en una comunidad dada y prevenir y prestar atención para no incrementar sus efectos negativos. Esto requiere del *principio de responsabilidad* de cada individuo e institución relacionada o que realice una acción directa o indirecta, el cual debe partir de una cultura de cuidado y respeto de los derechos humanos y de los bienes o propiedades disponibles.

Enfoque sensible a los conflictos

Los conflictos sociales son fenómenos de naturaleza multidimensional, que tienen la cualidad de indicar cambios o reacciones en el comportamiento de los grupos humanos, pero son propios de toda relación humana, por lo que no se pueden *evitar*, pero sí *gestionar de modo pacífico*. El objetivo de este enfoque es el de prevenir y gestionar los conflictos que se presenten de manera violenta, con el fin de reforzar los mecanismos, procesos y estructuras adecuadas para su transformación con el fin de que sean solucionados de manera pacífica y constructiva. Para lograr este objetivo, es clave que se conozcan los conflictos derivados del modelo de desarrollo prevaleciente en el país, que ha resultado, históricamente, en inequidad y pobreza para ciertos grupos sociales, como los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades rurales, lo que requiere de un enfoque de incorporación de acciones sectoriales y de múltiples dimensiones

Es, por consiguiente, central considerar que, para ser sensible ante los conflictos, se deben tener en cuenta los siguientes elementos:

- Comprender el contexto (histórico, político, cultural y socioeconómico) en el que se opera, en sus relaciones local, regional, nacional e internacional.
- Realizar un análisis de los conflictos identificados, y actualizarlo regularmente.
- Comprender la interacción entre la intervención externa y el contexto local.
- Unir el análisis de conflictos con el ciclo de gestión de la iniciativa o proyecto.
- Usar esta comprensión para evitar impactos negativos y maximizar impactos positivos. Planear, implementar, monitorear y evaluar la intervención de forma sensible a los conflictos (incluyendo el rediseño cuando sea necesario).

Es importante tener en cuenta que el enfoque de acción sin daño no tiene como objetivo ayudar a las empresas o las organizaciones a salvaguardarse de posibles conflictos; en su lugar, su uso tiene el efecto de contribuir a la protección de las iniciativas y las comunidades, lo que hace que, en su conjunto, sean más responsables, respetuosas, justas y transparentes. Otra falsa suposición es la de considerar que la acción sin daño únicamente sirve para analizar y mitigar los riesgos, puesto que siempre existirán riesgos residuales o emergentes (CDA, 2012), por ejemplo, por las demandas del mercado y las decisiones que se toman en las Conferencias de las Partes sin lograr realmente cumplir con las metas de disminución de la temperatura del planeta, la continuación de modelos extractivos sin respeto por los ciclos naturales de los ecosistemas, etc

Mecanismo por fases

El mecanismo está construido de tal forma que indica, en primera instancia, en la fase de la iniciativa de mitigación una lista de chequeo y los pasos necesarios para garantizar la acción sin daño. Por parte de la lista de chequeo, esta se compone de una serie de elementos habilitantes que posibilitan el desarrollo de los pasos a seguir para no generar acciones con daño. Los pasos constituyen, de igual forma, actividades de *obligatorio cumplimiento*, sin los cuales no se habilitan los cambios de fase.

Para cumplir con este mandato, se tomó como base lo dispuesto en el Art. 13 de la Resolución 1447 de 2018, para lo cual se ha organizado un mecanismo compuesto por tres **fases clave**, que, a su vez, comprenden una serie de actividades seleccionadas en función de la colaboración activa con las comunidades indígenas.

- Fase de Factibilidad:
 - Identificar violencias (directa/estructural/cultural), actores y vulnerabilidades
 - Planear logística para ejecutar las acciones según las condiciones territoriales.
 - Definir consulta previa/CLPI y registrar en Registro Nacional de las Emisiones Adicionalidad y Gases Efecto Invernadero (RENARE).

- Realice un análisis de vulnerabilidad y oportunidades donde se identifiquen hechos de vulneración de derechos humanos.
- Generar una lista de chequeo que tenga en cuenta: reconocimiento de autoridades tradicionales, respeto a CPLI, participación plena, diálogo culturalmente adaptado, cronograma conjunto, medios de verificación y evidencias.
- Fase de Formulación:
 - Identificación de los actores involucrados (CAR, Gobernación, Alcaldías, ONG, etc.)
 - Línea de base desarrollada en la fase de factibilidad.
 - Espacios de diálogo continuo.
 - Socialización de las preocupaciones y propuestas internas del territorio.
 - Identificación del problema y los objetivos.
 - Alternativas de solución.
 - Identificación de los beneficiarios.
 - Fortalecimiento de capacidades.
 - Mesas de trabajo o mesas interétnicas de seguimiento.
 - Estructuración del proyecto y fuente Financiación
 - Presentación de la iniciativa de mitigación de GEI, estructurado en conjunto con los líderes y/o representantes de las comunidades.
- Fase de Implementación:
 - Monitoreo o seguimiento de las actividades
 - Presentación de informes trimestrales *detallados*, en los que se reporten los avances en la ejecución entregados a autoridades y comunidades.
 - Carga en la Plataforma RENARE y rendición de cuenta
- Herramientas de análisis para decidir.
 - Comprender el contexto y hacer mapa de actores.
 - Identificar divisores como las desigualdades, estereotipos, intereses encontrados y conectores como los valores y las prácticas que unen con participación de mujeres, jóvenes y grupos vulnerables.
 - Analizar la intervención (dónde, qué, cuándo, con quiénes, recursos y riesgos) y adaptar materiales e idioma.
 - Ciclo de mejora continua. Revisar patrones de impacto y posibles desvíos de recursos, efectos de mercado, legitimidad y gobernanza, generar opciones y rediseñar cuando cambie el contexto; mantener PQRSD funcional, evidencias (actas, fotos, acuerdos) y acompañamiento institucional cuando sea necesario.

4.4. Esquema de beneficios económicos, su duración y condiciones

Es clave entender que los beneficios económicos, producto de los Programas o Proyectos de mitigación pueden ser inversiones para la comunidad para la ejecución de sus propios Planes de vida, Planes etnodesarrollo, u otros planes previamente concertados con la comunidad, en el marco de la formulación de ese programa o proyecto, en temas de salud, soberanía alimentaria, educación, entre otros posibles. En algunos proyectos REDD+ del *mercado voluntario*, sí se han realizado pagos económicos a las comunidades étnicas y locales, de acuerdo con porcentajes establecidos en la firma de acuerdos o contratos.

Como buenas prácticas en la ejecución de las iniciativas de mitigación, se resalta que, parte de esos recursos que ingresan por venta de certificados de carbono, hace parte de proceso de concertación con comunidades, sobre líneas generales de inversión y Planes de vida o Planes de etnodesarrollo. Este hecho materializa la autonomía de los pueblos indígenas, negros, afrocolombianos, raizales o palenqueros o comunidades campesinas, en el manejo de sus recursos y su planificación interna. Es clave aquí el concepto de ERPA (por su sigla en inglés) o Acuerdo de Compra para la Reducción de Emisiones, para cuya firma por parte de las comunidades, se debe tener en cuenta el desbalance de conocimientos, sobre todo el relacionado con finanzas y proyecciones económicas.

El proceso de socialización del ERPA puede estar compuesto por varias fases, que incluyen: un acercamiento inicial, la elaboración del contrato, la socialización y la ratificación. El acompañamiento técnico a las comunidades debe ser constante, para que exista claridad, en cuanto a los porcentajes de distribución y de inversiones. De igual forma, porque este se define para garantizar que los dineros vayan con destino a las actividades que están realmente priorizadas y haya lugar a efectos adversos por estos recursos. La socialización del ERPA se realiza cuando hay una firma oficial con las autoridades, bien sea las Asambleas Generales o Consejos Comunitarios y demás figuras contempladas por las comunidades, es decir, la autoridad que tenga la competencia para celebrar este tipo de contratos, en el marco del gobierno propio.

El acompañamiento técnico que realizan los desarrollares o aliados técnicos, debe incluir el fortalecimiento en materia de finanzas, temas administrativos y operativos en el manejo de los recursos, así como aspectos fiduciarios con las empresas que manejan los fondos. Este relacionamiento y los procesos de formación deben ser permanentes, durante todas las fases de la iniciativa. Dicha formación deberá estar alineada con modos de vida, para que haya armonía entre ese apoyo técnico y el respeto a las estructuras de gobernanza propias de los pueblos indígenas, negros, afrocolombianos, raizales y palenqueros y comunidades campesinas. Se propone que este fortalecimiento de capacidades hacia las comunidades sea ejecutado por un tercero (una organización indígena de primer, segundo o tercer nivel, una ONG o una institución del Estado) o que provenga de procesos internos de la comunidad, y no por el mismo desarrollador, dado que se podrían presentar un conflicto de intereses.

El mercado voluntario de carbono se estructura en el cumplimiento de propósitos comunes como las Salvaguardas de Cancún y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y que, los programas de certificación incluyen en sus lineamientos generales y metodologías, los pasos para asegurar que estos se cumplan y, en este sentido, son tanto los aliados técnicos de proyecto, los Organismos de Validación y Verificación- OVV, como los programas de certificación quienes deben velar por su estricto cumplimiento, como parte de las reglas de mercado que atienden a los compromisos internacionales de los países en que se desarrollan las iniciativas o proyectos.

En el marco de la Resolución 1447 de 2018, dispone que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible puede, en el momento que lo considere pertinente, solicitar información adicional sobre proyectos REDD+ que se desarrollen en el país y, especialmente, en relación con las salvaguardas, y, en particular, a la distribución de beneficios (artículo 45 de la Resolución 1447 de 2018). El Ministerio, en cabeza del RENARE y como condición para el registro de un proyecto, tiene la facultad legal (artículos 11, 12 y 38) para exigir que estas evidencias amparen y soporten dicha solicitud en la plataforma. Y no solamente puede solicitar información a los responsables de las iniciativas, sino a los involucrados en el ciclo del proyecto (OVV, Programa, etc.), con el propósito de evaluar el estado de cumplimiento de las Salvaguardas de cualquier iniciativa que se deba registrar en el RENARE, incluso, negar el registro cuando se encuentren irregularidades (artículo 38).

Objetivo de la salvaguarda de distribución de beneficios:

Garantizar que los beneficios de las iniciativas de mitigación de GEI se distribuyan de manera justa, equitativa, transparente y efectiva, considerando las cargas y responsabilidades asociadas a dichos beneficios y dando relevancia a los pueblos indígenas, negros, afrodescendientes, raizales y palenqueros y comunidades campesinas que son habitantes y titulares del derecho de dominio sobre el territorio.

Requisitos:

Para garantizar el cumplimiento de compromisos internacionales en materia de salvaguardas, de la normativa nacional y de las reglas de los programas sobre distribución justa y equitativa de beneficios, se debería poder garantizar que se cumplan parte o la totalidad de los siguientes requisitos durante el ciclo de vida de la iniciativa de mitigación:

- Factibilidad:
 - Construcción de un plan de distribución de beneficios mediante el cual el titular de una iniciativa de mitigación identifique, acuerde, documente e implemente los mecanismos para la asignación, gestión, entrega y seguimiento de los beneficios derivados de la iniciativa, de conformidad con las contribuciones, responsabilidades y riesgos asumidos por los actores involucrados.
 - Cumplir con las normas sobre consulta o consentimiento previo, libre e informado y participación informada para las comunidades, agotando los procedimientos requeridos por las autoridades competentes (Mininterior)
 - Los aliados técnicos o desarrolladores deben velar por involucrar a todas las comunidades, instituciones y otras partes interesadas que puedan verse afectadas por las actividades previstas por el proyecto, con base en un exhaustivo proceso de caracterización de actores, incluyendo análisis espaciales e información secundaria apropiadas, apoyado desde el contexto institucional de la región o localidad en que se desarrolle la iniciativa.
 - Inclusión de las mujeres como un actor decisivo. Las mujeres pueden aportar propuestas valiosas para abordar la distribución de beneficios en iniciativas de mitigación de GEI.
 - Determinar los beneficios monetarios y no monetarios del proyecto (económicos, sociales, culturales y ecosistémicos) y especificar los beneficiarios directos e indirectos, tanto a nivel general, como dentro de las comunidades.
 - Identificar y proteger beneficios asociados a los conocimientos y prácticas tradicionales, a los recursos genéticos y en general de la biodiversidad, estableciendo acuerdos específicos para su manejo cuando sea necesario.
 - Documentar las cargas y responsabilidades de los actores, utilizándolos como base para una distribución proporcional de los beneficios en todas las fases del proyecto. Las proyecciones de viabilidad técnica y financiera del proyecto deben contemplar las cargas y responsabilidades necesarias para desarrollar las acciones de acercamiento a la comunidad, con base en el respeto de las normas nacionales y acuerdos internacionales sobre derechos de comunidades tradicionales.
 - Garantizar negociaciones justas y equitativas con las comunidades y formalizar acuerdos alcanzados, incluyendo el acompañamiento del Estado, cuando sea requerido. Las acciones de acercamiento con las comunidades se deben hacer respetando los conductos regulares y exponiendo las intenciones ante los entes territoriales y autoridades competentes.

- **Formulación:**

- Los desarrolladores deben exponer la propuesta de iniciativa de manera extensa, incluyendo tiempos para análisis y retroalimentación en lenguas propias y materiales de ayuda comprensibles y adecuados sobre las salvaguardas de Cancún (en el caso de Colombia, la Interpretación Nacional de Salvaguardas) y reunir evidencias de su apropiación por parte de las comunidades locales y sus órganos representativos.
- Los desarrolladores deben velar por que el tiempo utilizado para evaluar y aprobar la suscripción de los contratos sea el adecuado, que estos sean construidos con la participación de toda la comunidad, con base en un proceso de fortalecimiento de capacidades preliminar, antes de que los representantes den su firma, para asegurar una participación plena, efectiva, significativa y transparente de las comunidades, en el marco del desarrollo del “debido proceso” y de la aplicación del “principio de precaución”.
- Garantizar un proceso participativo que integre a todos los actores involucrados desde el diseño hasta la implementación y cierre del proyecto
- Definir mecanismos claros para distribuir los beneficios, considerando las inversiones realizadas, tanto en dinero o en especie, por los distintos actores involucrados, priorizando a comunidades como protectoras del capital natural y sus servicios ecosistémicos asociados, que contribuyen a la conservación y uso sostenible.
- El plan de distribución de beneficios debe detallar quién, cómo y cuándo se invertirán los recursos monetarios generados, asegurando transparencia y claridad en los compromisos asociados.
- Informar a todos los miembros de las comunidades sobre los beneficios monetarios y no monetarios de manera clara y segura, evitando comprometer la convivencia pacífica. El proceso que conduce a la formalización de acuerdos o contratos debe estar exhaustivamente documentado (evidencias documentales, gráficas y otras) y que, antes de la firma, la población en extenso del territorio colectivo conozca el alcance de la distribución de beneficios y pueda opinar y sugerir a sus líderes (representantes de organizaciones de primero y segundo nivel) cualquier cambio que consideren pertinente en torno a las salvaguardas.
- El plan de distribución de beneficios debe garantizar la valoración técnica, social y económica de los ecosistemas y elementos de biodiversidad que podrían ser afectados por el desarrollo de las actividades del proyecto y destinar recursos y responsabilidades para evitar que exista daño neto. Esto debe cobrar mayor importancia si se trata de ecosistemas o elementos de la biodiversidad amenazados o con algún grado de vulnerabilidad.
- El plan de distribución de beneficios debe incorporar criterios de valoración técnica y económica de los riesgos de impactos negativos sobre la base natural y las respectivas medidas de mitigación, compensación o evitación de estos.
- El plan de distribución de beneficios debe hacer énfasis en la evaluación de riesgos sociales para identificar y mitigar potenciales impactos negativos en las comunidades. Algunos elementos clave a considerar son: cambios en el acceso y control del territorio y los medios de vida; alteraciones en las estructuras sociales y relaciones de poder existentes; impactos en la salud y seguridad de la comunidad; efectos en el patrimonio cultural y prácticas tradicionales; cambios demográficos por migración inducida por el proyecto; presión sobre servicios e infraestructura local.
- Establecer medidas continuas para identificar, prevenir, mitigar y evaluar riesgos en la distribución de beneficios, protegiendo los derechos de comunidades étnicas y locales durante todo el proyecto.

- El plan de distribución de beneficios debe velar por el cumplimiento de criterios de remuneración justa, en el marco de normas sobre derechos de los trabajadores y las trabajadoras, de la inclusión de grupos minoritarios, de prevalencia de adquisiciones locales y contratación de mano de obra local.
 - Fortalecer las capacidades comunitarias para identificar y gestionar los beneficios del proyecto de manera autónoma y sostenible.
 - La gobernanza y el empoderamiento de las comunidades para la gestión de sus territorios es un aspecto fundamental en las iniciativas de mitigación y otras iniciativas de mitigación de GEI. Este enfoque busca que las comunidades locales tengan, cada vez más, un papel protagónico en la toma de decisiones y en la implementación de acciones para la conservación y manejo sostenible de los bosques.
 - Asegurar que las comunidades comprendan la distribución de beneficios, garantizando intérpretes y materiales adecuados para grupos étnicos con barreras lingüísticas.
 - Las acciones de socialización y las consecuentes acciones de fortalecimiento de capacidades deben garantizar que todo el conjunto de la población (familias) que integran las comunidades locales conozcan las particularidades del proyecto, el soporte técnico, social, financiero, matemático y legal de la distribución de beneficios pactada en los contratos, considerando que algunas familias indígenas ni siquiera hablan el idioma oficial de cada país.
 - Tanto los contratos, como las evidencias del proceso de consentimiento libre, previo e informado en el marco del cual se socializan, se evalúan internamente (espacios de gobierno propio) y aprueban los acuerdos y contratos que incorporan esquemas y mecanismos de distribución de beneficios, deben ser compartidos en el enlace de acceso al Sistema Nacional de Salvaguardas- SNS, que debe operar desde la plataforma del RENARE, como prerrequisito de la fase de validación y verificación.
- **Validación y verificación:**
- Los aliados técnicos de proyecto deben reportar al SIS del RENARE, las fechas en que se adelantarán las actividades de auditoría, una vez se haya aprobado el plan de auditoría por parte del OVV, para que Minambiente, de acuerdo con su conveniencia, determine la pertinencia o no de participar o solicitar información sobre el procedimiento que el OVV realice, con el fin de garantizar que se está cumpliendo con la salvaguarda de distribución justa y equitativa de beneficios y otras enmarcadas en el proceso de consentimiento libre, previo e informado, en el marco de las disposiciones del Artículo 45 de la Resolución 1447 de 2018.
 - Minambiente y los OVV deberán asegurar que toda la información sobre actores, beneficios, cargas, responsabilidades, compromisos y acuerdos sea registrada, actualizada y esté disponible de manera accesible para todas las partes interesadas que cada iniciativa ha identificado. Los OVV podrán solicitar entrevista a Minambiente particularmente los equipos técnicos encargados de la administración del RENARE, con el fin de verificar los trámites realizados ante esta plataforma y otras evidencias presentadas por los aliados técnicos del proyecto, en relación con el SNS y otros temas que soporten los resultados de mitigación del proyecto.
 - Minambiente o la entidad delegada por este, debe examinar la pertinencia de los soportes y procedimientos presentados y emitir un concepto favorable de cumplimiento antes de que se termine el ciclo de Validación/Verificación. Este concepto debe ser vinculante para el registro en el RENARE y para el registro de las iniciativas en el programa en que se inscriben.
 - Dependiendo de la duración del proyecto, cada período de verificación, el desarrollador deberá adelantar un análisis que demuestre el impacto del proyecto en

términos de beneficios distribuidos y su contribución a la sostenibilidad ambiental y social. De existir impactos no deseados debe desarrollar además del análisis, un plan de manejo de riesgos y en cada auditoría demostrar su cumplimiento.

- **Implementación**

- Minambiente, los OVV y los Programas de Certificación en el marco de sus competencias en relación con las iniciativas de mitigación deberán garantizar la trazabilidad de los beneficios distribuidos, asegurando que lleguen efectivamente a los destinatarios previstos en el marco de las funciones definidas en el Artículo 45 de la Resolución 1447 de 2018, lo cual debe estar documentalmente soportado y debe ser requisito para el mantenimiento del registro en el RENARE.
- A partir de un proceso continuo de fortalecimiento de capacidades, las actividades de las iniciativas de mitigación deben asegurar la incorporación de cláusulas en los contratos que permitan a las comunidades tomar decisiones autónomas sobre el uso de los fondos recibidos y su entrega y manejo en el caso de los beneficios monetarios directos. En todo caso, es recomendable usar mecanismos formales, como cuentas bancarias, fiducia u otras, para incrementar la transparencia en el destino de los recursos monetarios y facilitar la veeduría por parte de órgano internos de control.
- Los órganos de control deben estar conformados por terceras partes independientes (revisorías fiscales) adscritas y contratadas con cargo a los acuerdos de distribución de beneficios y en responsabilidad del desarrollador y las comunidades.
- Los titulares, aliado técnicos y comunidades que participan en el proceso de certificación de los resultados de mitigación del proyecto (con excepción de los OVV y los programas de certificación), deben evaluar y verificar los riesgos asociados a la distribución de beneficios en cada iniciativa de mitigación, para tratar de prevenir los impactos identificados y realizar acciones de mitigación de manera oportuna.
- Implementar un sistema transparente para evaluar y verificar el cumplimiento de la distribución de beneficios, incorporando la retroalimentación para ajustes y acciones correctivas, en caso de desviaciones o incumplimientos. De manera consistente con el plan de monitoreo del proyecto de mitigación de GEI, se deben establecer los periodos de evaluación del esquema de distribución de beneficios de acuerdo con los indicadores definidos.
- Incluir informes técnicos y financieros sobre la distribución de beneficios de conformidad con los periodos de acreditación de la iniciativa.
- Exigir a compradores de certificados de carbono procesos de debida diligencia y verificación de riesgos en la distribución de beneficios, asegurando que las comunidades no sean afectadas y que las transacciones cumplan con la normativa aplicable.

- **Cierre:**

- Los aliados técnicos de cada iniciativa deben elaborar un informe final y consolidar todo el conjunto de evidencias verificables para demostrar el cumplimiento de los compromisos de distribución y los resultados de las evaluaciones de todos los impactos sobre los ecosistemas y a nivel social y cultural que se presentaron durante toda la vida útil del proyecto.
- Las comunidades, con base en el proceso de fortalecimiento de capacidades y empoderamiento del proyecto, deben facilitar a las entidades con competencia en el territorio las evidencias necesarias para que se pueda adelantar, al final del ciclo del proyecto, un análisis que demuestre el impacto del proyecto en términos de beneficios distribuidos y su contribución a la sostenibilidad ambiental y social.

- En caso de haberse presentado impactos que no pudieron ser mitigados, se debe adelantar una evaluación económica de los mismos, cuya compensación o indemnización debe estar asegurada en el esquema de distribución de beneficios y debe haber evidencia de su ejecución.
- Debe propenderse por la difusión de los resultados finales del proyecto al interior de las comunidades locales y otros actores relevantes con competencias legales en el territorio.

4.5. Directrices para promover estándares de debida diligencia de las empresas participantes en el mercado de carbono forestal

La relación entre las empresas y los derechos humanos, surgida después de desastres ambientales y hechos que vulneraron los derechos de comunidades, personas y grupos humanos, tiene una trayectoria importante de esfuerzos por alcanzar su reglamentación en el presente siglo. Sin embargo, la discusión ha sido intensa y los logros escasos, porque ha primado un enfoque de *voluntarismo* (de derecho *blando*) por sobre una regulación dentro del derecho *duro*, es decir, de normas obligatorias en materia civil, administrativa y penal.

En ese contexto, tras más de una década de deliberaciones en el seno del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se aprobaron por unanimidad los *Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos* (PR-ONU, en adelante), en junio de 2011, que representan, como lo han señalado el Grupo de expertos independientes de la ONU sobre empresas y derechos humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, un *piso* sobre el cual se plantean las responsabilidades de los Estados y los deberes de las empresas, como personas jurídicas. Así, los PR-ONU son el principal instrumento internacional actualmente vigente, aunque desde 2014 se discute, por iniciativa de los gobiernos de Ecuador y Sudáfrica, un instrumento internacional de carácter vinculante, promovido por un Grupo Intergubernamental de composición abierta, que celebró en 2024, en Ginebra, su décimo año de discusiones del texto, cuyas posibilidades siguen inciertas por las presiones de empresas transnacionales y algunos de los gobiernos donde tienen sus casas matrices.

Objetivo:

Promover, a través de estas directrices, un estándar nacional para empresas en Colombia para el diseño, formulación, desarrollo, evaluación, verificación y certificación de iniciativas de mitigación de GEI, principalmente REDD+, dirigidas a su implementación en territorios étnicos y campesinos, de modo que permita la apropiación de ellas por las comunidades locales, de pueblos indígenas y afrodescendientes y el respeto de sus derechos humanos por las empresas participantes en este mercado, con la supervisión de las entidades estatales correspondientes para la protección de sus derechos humanos, étnicos y ambientales en condiciones de equidad, transparencia y en concordancia con los compromisos legales e internacionales adquiridos por el país en esta materia.

Destinatarios:

Estas Directrices han sido diseñadas para su aplicación por todas las empresas involucradas en el mercado de carbono, independientemente de su nacionalidad, tamaño o capital. Igualmente, se ha pensado como una herramienta útil para delimitar las obligaciones de los garantes de derechos estatales (Minambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales, los gobiernos municipales y las gobernaciones), y, principalmente, para orientar a los pueblos indígenas y

afrodescendientes, así como para aquellas comunidades campesinas que participan del mercado de carbono, en especial, en iniciativas REDD+.

Etapas mediante las cuales las empresas deben desarrollar su modelo en el mercado de carbono (voluntario o de cumplimiento) en Colombia

Para desarrollar un modelo de negocio en el mercado de carbono en Colombia, las empresas deben respetar la Constitución y las leyes, basadas en los derechos humanos y las normas ambientales establecidas nacional e internacionalmente, e implementar los procedimientos contenidos en los Principios Rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos, entre ellos, los relativos a la diligencia debida.

En ese sentido, a continuación, se explica la forma como las empresas deberán actuar en cada fase del ciclo de las iniciativas de mitigación, relacionadas con sus obligaciones de derechos humanos y de salvaguardas sociales y ambientales establecidas en las normas del Derecho Ambiental:

Tabla 2. Actuación empresarial en cada etapa del ciclo del proyecto según estándares ambientales y de derechos humanos

Etapas	Acción	Responsable(s)
Factibilidad	<ul style="list-style-type: none"> - Investigación sobre los componentes culturales, sociopolíticos y económicos del pueblo en donde se propondrá el contrato, como componentes de la línea de base. - Consulta previa, libre e informada con el pueblo étnico que corresponda, de acuerdo con sus autoridades legítimas. 	Empresas privadas y autoridades indígenas legítimamente reconocidas
	<ul style="list-style-type: none"> - Diagnóstico de condiciones sociales, culturales, económicas y políticas del pueblo indígena o afrodescendiente con el que se propone realizar un contrato, a través de un proceso de consulta previa, libre e informada con las autoridades legítimamente constituidas. - Identificación de prioridades y necesidades para la inversión de los recursos, sumados a los del Sistema General de Participaciones, su distribución, períodos aproximados de ingreso de recursos, mecanismo de repartición de beneficios, veeduría y acompañamiento de órganos de control del Estado. Esta acción y la anterior constituyen la Línea de Base para el diseño del proyecto (PDD). 	<ul style="list-style-type: none"> • Ministerio del Interior • Empresas interesadas • Pueblos étnicos participantes • Defensoría Regional del Pueblo
Formulación	<ul style="list-style-type: none"> - Documento de formulación con identificación de polígonos, cálculos de captación de emisiones y demás aspectos técnicos, participación de la comunidad concernida, cronograma de actividades, incluyendo reuniones informativas, visitas a las comunidades, auditorías y mecanismos de interlocución y presentación del documento a Minambiente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pueblos étnicos participantes • Empresas formuladoras y desarrolladoras y entidades aliado técnicos • Minambiente.
Validación	<ul style="list-style-type: none"> - Declaraciones de validación e informe técnico sobre el objeto de la validación, los estándares utilizados, la metodología empleada y la conclusión de la validación. 	<ul style="list-style-type: none"> • Delegado(a) técnico de pueblo étnico o mecanismo de gobernanza del proyecto • Empresas de OVV • Minambiente.
Implementación	<ul style="list-style-type: none"> - Documento de informes semestrales con indicadores claramente establecidos, obstáculos y problemas identificados, medios para superar brechas, participación de las mujeres y de las autoridades y miembros de las comunidades concernidas. - Informe anual de resultados, explicando la forma como se abordaron los problemas de derechos humanos, con anexos técnicos medibles (de empresas de OVV y Certificadoras), según los indicadores del Minambiente y un informe de auditoría independiente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pueblos étnicos participantes, en coordinación con el mecanismo de gobernanza • Empresas (desarrolladoras, de validación y verificación y certificación) • Empresa de auditoría

Etapas	Acción	Responsable(s)
		<ul style="list-style-type: none"> • Minambiente. • Mecanismo de quejas de financiadores
Verificación	<ul style="list-style-type: none"> - Declaraciones de verificación e informes técnicos sobre el objeto de la verificación, los estándares utilizados, la metodología empleada, incluyendo en detalle las Actas de reuniones realizadas y la conclusión de la verificación 	<ul style="list-style-type: none"> • Delegado(a) técnico de pueblo étnico o mecanismo de gobernanza del proyecto • Empresas de OVV • Minambiente.
Certificación	<ul style="list-style-type: none"> - Informe técnico sobre el objeto de la certificación, los estándares utilizados, la metodología empleada, incluyendo en detalle las Actas de reuniones realizadas, las visitas a los polígonos aprobados y la conclusión de la certificación 	Delegado(a) técnico de pueblo étnico o mecanismo de gobernanza del proyecto Empresas certificadoras Minambiente. ONAC
Cierre	<ul style="list-style-type: none"> - Los aliados técnicos de cada iniciativa deben elaborar un informe final y consolidar todo el conjunto de evidencias verificables para demostrar el cumplimiento de los compromisos de distribución y los resultados de las evaluaciones de todos los impactos sobre los ecosistemas y a nivel social y cultural que se presentaron durante toda la vida útil del proyecto. - Las comunidades, con base en el proceso de fortalecimiento de capacidades y empoderamiento del proyecto, deben facilitar a las entidades con competencia en el territorio las evidencias necesarias para que se pueda adelantar, al final del ciclo del proyecto, un análisis que demuestre el impacto del proyecto en términos de beneficios distribuidos y su contribución a la sostenibilidad ambiental y social. - En caso de haberse presentado impactos que no pudieron ser mitigados, se debe adelantar una evaluación económica de los mismos, cuya compensación o indemnización debe estar asegurada en el esquema de distribución de beneficios y debe haber evidencia de su ejecución. - Debe propenderse por la difusión de los resultados finales del proyecto al interior de las comunidades locales y otros actores relevantes con competencias legales en el territorio. 	Aliado técnicos (empresas, comunidades, otros actores) Minambiente. Órganos de control del Estado (Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación, DIAN)

Fuente: elaboración propia, 2026

Obligaciones de las personas jurídicas, como las empresas, en el mercado de carbono en territorios étnicos

Como lo indican los órganos intergubernamentales de derechos humanos, y, en particular, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, los derechos humanos

incluyen los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas y otros titulares de derechos con vínculos ancestrales y derechos a la tierra. Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los Pueblos Indígenas interesados, a través de sus propias instituciones representativas obtener su consentimiento libre e informado antes de la aprobación de cualquier proyecto que afecte a sus tierras o territorios y otros recursos, teniendo en cuenta la especificidad nacional y el contexto jurídico. Defender sus derechos individuales y colectivos, incluido su derecho a ser en pie de igualdad en el desarrollo y a poseer, utilizar desarrollar y controlar sus tierras, territorios y recursos es crucial para promover un desarrollo equitativo⁸.

Por tanto, teniendo a los derechos indígenas (y, por extensión a los de las comunidades afrodescendientes), las personas jurídicas, como las empresas, tienen un conjunto de obligaciones derivadas de los marcos legales vigentes en Colombia, dentro de las cuales se

⁸ Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas, 2008. Disponible en: https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2018/11/UNDRIP_S_web.pdf

enumeran, sin menoscabo de la integralidad de los derechos humanos, a continuación, las más relevantes, según los Principios Rectores de la ONU sobre las empresas y los derechos humanos:

- Elaborar e incorporar en sus estatutos una política de derechos humanos institucional:

La política de los derechos humanos es una declaración escrita y pública en la que la empresa confirma que respeta y da reconocimiento a los instrumentos de derechos humanos internacionalmente reconocidos, en todas las fases del ciclo de las iniciativas de mitigación de GEI, incluyendo los principios de no discriminación por razones de origen étnico o racial, de género, procedencia geográfica, condición migratoria, orientación sexual, opinión política, religión o creencias espirituales, entre otras. Además, prohíbe el trabajo infantil (según la definición de niñez de la Convención Internacional de derechos del niño, corresponde a toda persona menor de 18 años), y destaca, en este caso, los derechos de los pueblos indígenas (o afrodescendientes y campesinos o trabajadores rurales), en particular sus derechos territoriales y bioculturales, en reconocimiento de las condiciones y exigencias jurídicas del ciclo del proyecto, que pueden variar en virtud de nuevos desarrollos normativos y jurisprudenciales más garantistas respecto de los derechos de las comunidades locales.

- Crear los procesos internos en la empresa para abordar los temas de derechos humanos:

Bien sea individualmente o en sociedad con otros, incluyendo las propias comunidades, la empresa deberá designar las responsabilidades en materia de derechos humanos al más alto nivel gerencial, con el personal contratado y dedicado específicamente a tratar esas cuestiones, al que le será destinado el presupuesto necesario para hacer las visitas de terreno, las tareas y procedimientos específicos para abordar los problemas de sus operaciones o servicios, incluyendo disposiciones sobre dichas responsabilidades en la cadena de valor.

- Realizar un diagnóstico para evaluar los riesgos de derechos humanos antes de iniciar la iniciativa de mitigación de GEI:

El diagnóstico de evaluación de riesgos de derechos humanos deberá hacer parte de la evaluación de riesgos e impactos ambientales y sociales, y debe estar a cargo del personal designado por la empresa para la relación con la población indígena e incluir información recopilada y analizada de fuentes diversas, en particular de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible

- Realizar un proceso de consulta previa:

Con el o los pueblos indígenas o afrocolombianos que confluyan en el área determinada para adelantar la iniciativa mitigación de GEI, la empresa llevará a cabo un proceso de consulta previa, libre e informada. Este proceso también implica que deban desarrollarse formas de participación plenas y efectivas para comunidades campesinas.

En desarrollo de la fase de factibilidad, la empresa deberá acatar lo dispuesto en el Artículo 230 del Plan Nacional de Desarrollo (PND), que establece que procede la consulta. Y la sentencia T-248, que dice que todo el tiempo, a lo largo del proyecto, se debe mantener el consentimiento.

- Realizar ciclos de evaluación de riesgos de derechos humanos y análisis de impactos negativos:

Las empresas deberán recoger los desacuerdos, quejas, reclamos y conflictos con los pueblos étnicos y campesinos participantes, a través de un mecanismo de Preguntas, Quejas, Reclamos y Sugerencias (PQRS), los cuales deberán llevarse a discusión en las reuniones periódicas con las instituciones gubernamentales y estatales que hacen parte del seguimiento de la Sentencia T-248/2024, así como de los escenarios de toma de decisiones sobre Proyectos REDD+. Este ministerio pondrá en marcha sus herramientas de mediación, con el apoyo de los entes de control del Estado, a través del Diálogo Regional Ambiental, y se reforzarán en desarrollo de la orden 13

de la Sentencia T-248/2024, que define la estrategia integral de formación, asesoría y acompañamiento a los pueblos indígenas en los proyectos REDD+.

Medidas de actuación empresarial en los mercados de carbono

La relación entre las empresas y los pueblos étnicos y comunidades locales suele ser **asimétrica**, debido a la complejidad de la formulación de los proyectos y a la naturaleza de los mercados. Es problemática cuando hay opacidad en la información o se caen expectativas. Al Estado le corresponde intervenir cuando la asimetría deriva en vulneraciones a los derechos de los titulares de derechos.

Por ello, para abordar la Conducta Empresarial Responsable, CER, en los mercados de carbono, se formulan a continuación una serie de recomendaciones que apuntan a la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto de los derechos de las comunidades.

Las recomendaciones se hacen dependiendo de la gravedad de los hechos involucrados en la relación entre los pueblos indígenas y las empresas aliado técnicos, titulares, los organismos de validación y verificación y las empresas certificadoras, referidas a los derechos humanos con enfoque étnico, y en particular:

- a la libre determinación, a la autonomía y el gobierno propio,
- su derecho a la tierra, el territorio y sus recursos;
- el derecho a la identidad e integridad física y cultural y con ello su derecho al desarrollo propio, y,
- el derecho a la consulta y el consentimiento libre, previo e informado.

Recomendación 1: Fortalecer las capacidades de las comunidades interesadas en participar de las iniciativas de mitigación y en los mercados de carbono con empresas

Esta recomendación se dirige, en primer lugar, a las empresas. Éstas deberán formular un plan de capacitación del personal en temas de los derechos de las comunidades de pueblos indígenas y afrodescendientes relativos a los usos, costumbres, normatividad y mecanismos de Salvaguardas de Cancún y su interpretación nacional en Colombia.

Las empresas deberán destinar los recursos necesarios para contratar a personal experto de disciplinas como la antropología, la biología y otras ciencias ambientales y económicas, que permitan una apropiación de los estándares internacionales en materia de derechos humanos, con enfoque particular en los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes.

Recomendación 2: Establecer con claridad la distribución de beneficios de la negociación de certificados de carbono con criterios de equidad y justicia

El reconocimiento constitucional y legal de la propiedad de carácter colectivo de los territorios étnicos, cuya jurisdicción pública está basada en la autonomía y el gobierno propio, lo que hace que los beneficios -entendidos ampliamente- implican no solamente la distribución de los recursos que se obtienen de la venta de certificados de carbono, sino que tienen por fundamento los conocimientos ancestrales de las comunidades, sin los cuales todo el esquema financiero no se sostendría.

La transparencia en la distribución de los beneficios obtenidos puede disminuir los riesgos de corrupción y lavado de activos, teniendo en cuenta la coexistencia de riesgos de actividades ilegales en los territorios colectivos (conforme a la Alerta Temprana 007 de 2024 de la Defensoría del Pueblo), y, en desarrollo de la misionalidad de la Superintendencia financiera, para evitar la colusión de precios. El MINAMBIENTE podría publicar información periódica para señalar las

variaciones de precios respecto de los costos de reforestación por hectárea, de modo que las comunidades y demás actores del mercado tengan esos datos a disposición.

Recomendación 3: Acción coordinada entre las comunidades y actores de las iniciativas de mitigación en bosques y ecosistemas estratégicos en Colombia

Múltiples actores gubernamentales, estatales, no gubernamentales y empresariales tienen presencia en ecosistemas estratégicos de la Amazonía, la Orinoquía, el Pacífico y otras zonas de Colombia. Los esfuerzos de algunas ONG por unificar los temas relativos a los acuerdos justos y equitativos son ejemplo de ello. Por tanto, se recomienda que los programas que se desarrollan por diversas iniciativas propicien espacios de encuentro y diálogo nacional de comunidades con experiencia en iniciativas de mitigación, sobre las metodologías, propósitos y acciones comunes que permitan que los titulares de derechos puedan ejercer de manera autónoma su libre determinación sobre los proyectos y planes de vida para desarrollar sus formas de vida, con enfoques diferenciales.

5. Escenarios de participación

Los escenarios de participación se entienden como momentos y mecanismos en los que las comunidades étnicas y locales intervienen de manera plena, efectiva y culturalmente adecuada en la toma de decisiones, implementación, seguimiento y control de las iniciativas de mitigación de GEI en sus territorios.

A continuación, se presentan siete escenarios de participación de acuerdo a los momentos o fases de las iniciativas de mitigación de GEI

- **Escenario de información y socialización temprana**

Objetivo: Garantizar el derecho a la información suficiente, oportuna y comprensible durante la fase de factibilidad e inicio de formulación

Características:

- Socialización amplia y plena con las autoridades y comunidad en el territorio.
- Información clara sobre naturaleza del proyecto, mercado de carbono, riesgos, beneficios, duración, actores y efectos territoriales.
- Presentación de la propuesta en lenguas propias y formatos culturalmente adecuados.
- Fomentar el liderazgo de las autoridades tradicionales y administrativas y la apropiación del proyecto por la comunidad.

- **Escenario de deliberación y decisión autónoma**

Objetivo: Ejercer la libre determinación, la autonomía y el autogobierno durante todo el proyecto y en particular, antes del registro del proyecto.

Características:

- Espacios internos de la comunidad (Asamblea General u órganos propios).
- Evaluación colectiva sobre si se quiere o no desarrollar la iniciativa.

- Definición de condiciones mínimas: titularidad, rol de aliados, actividades permitidas, salvaguardas.
- Espacio para la toma de decisiones sin presiones, incentivos indebidos o negociaciones individuales.

- **Escenario de consulta previa y/o consentimiento libre, previo e informado (CLPI)**

Objetivo: Garantizar el derecho fundamental a la participación cuando exista afectación directa

Características:

- Solicitud de la procedencia de CLPI ante la DANCP (MinInterior).
- En caso de proceder esta debe implementarse de buena fe, culturalmente adecuado y con información completa sobre la iniciativa.
- Protocolización de acuerdos y definición clara de compromisos.
- Los costos serán asumidos por el titular y/o aliado técnico de la iniciativa

- **Escenario de implementación participativa**

Objetivo: Garantizar participación activa en la ejecución y para el respeto de los modos de vida.

Características:

- Participación comunitaria en actividades del proyecto (monitoreo, conservación, restauración).
- Articulación con planes de vida y ordenamiento propio.
- Reconocimiento de autoridades ambientales indígenas.
- Prevención de afectaciones a prácticas ancestrales.

- **Escenario de seguimiento, monitoreo y verificación social**

Objetivo: Garantizar control social y cumplimiento de salvaguardas durante toda la implementación y certificación

Características:

- Participación comunitaria en el MRV y seguimiento de salvaguardas sociales y ambientales.
- Acceso a información en RENARE y SIS.
- Acompañamiento de entidades públicas cuando se requiera.
- Verificación de cumplimiento de acuerdos de consulta y CLPI.

- **Escenario de distribución de beneficios y rendición de cuentas**

Objetivo: Garantizar justicia, equidad y transparencia en los beneficios

Características:

- Definición participativa del esquema de beneficios.

- Plan de inversión comunitario aprobado por la Asamblea.
- Rendición periódica de cuentas financieras y operativas.
- Veedurías comunitarias y, de ser el caso, fiducia independiente.

- **Escenario de quejas, reclamaciones y acceso a la justicia**

Objetivo: Garantizar mecanismos efectivos de protección de derechos.

Características:

- Sistemas de PQRS culturalmente adecuados y accesibles.
- Canales internos y externos (Minambiente, MinInterior, Defensoría).
- Plazos claros y rutas de escalamiento.
- No represalias contra quienes reclaman.

6. Alcance del Protocolo

Los enfoques, medidas, lineamientos y directrices aquí contenidas deben ser aplicadas a los proyectos REDD+ en el marco del mercado voluntario del carbono y están dirigidas a todos los actores involucrados, conforme a la legislación complementaria y las recomendaciones y estrategias derivadas de otras órdenes formuladas por la Corte Constitucional en la Sentencia T 248 de 2024.

Los proyectos REDD+ son un tipo de proyecto de mitigación de Gases de Efecto Invernadero que implementa actividades en un área geográfica delimitada y su titular es de carácter privado o público. Estas iniciativas deben demostrar sus resultados de mitigación en el marco del cumplimiento de las metas indicadas en la Estrategia Integral de Control a la Deforestación y Gestión de Bosques, las metas nacionales de cambio climático establecidas bajo la CMNUCC y las salvaguardas establecidas por ella y su interpretación nacional. Además, estos proyectos incluyen acciones que conducen a remover o reducir las emisiones de GEI debidas a deforestación y degradación de bosques naturales, tales como:

- Conservación de las reservas forestales de carbono.
- Gestión sostenible de los bosques.
- Incremento de las reservas forestales de carbono.
- Reducción de las emisiones debidas a la deforestación.
- Reducción de las emisiones debidas a la degradación forestal.

Sin bien la orden proferida por la Corte enfatiza los proyectos REDD+, el Ministerio identificó que las problemáticas y fallas identificadas en una lectura completa de la sentencia tienen la potencialidad de aplicación en diferentes tipos de iniciativas de mitigación de GEI de proyectos REDD+. Por tanto, en razón al principio de economía, en virtud del cual las autoridades deben *“optimizar el uso del tiempo y de los demás recursos, procurando el más alto nivel de calidad en sus actuaciones y la protección de los derechos de las personas”* (art. 3 CPACA), al principio de participación que se garantiza con la consulta de este instrumento y al deber de regulación exigido por la Corte Constitucional en la sentencia aludida: los criterios, medidas, acciones, mecanismos, esquemas y directrices propuestos serán de aplicación en todas las iniciativas de mitigación de GEI de proyectos REDD+ que se desarrollen en territorios con presencia de comunidades locales,

campesinas y étnicas: indígenas, afrocolombianas, palenqueras y raizales, en todas las fases de este tipo de iniciativas de mitigación, incluyendo la validación, verificación y cierre de ellas.

Por tal razón, este Protocolo se refiere a iniciativas de mitigación para dar alcance a proyectos REDD+ y otros proyectos del sector FOLU, que puedan acogerse a este Protocolo. Cuando se mencione proyectos REDD+, corresponderá a aspectos específicos de este tipo de iniciativas.

Adicionalmente, se recuerda que los titulares de las iniciativas mitigación, incluidos los proyectos REDD+, están obligados a dar cabal cumplimiento a las Salvaguardas Sociales y Ambientales definidas por la CMNUCC, adoptadas por el país a través de su Interpretación Nacional de Salvaguardas Sociales y Ambientales, en los términos ordenados por el artículo 230 de la Ley 2294 de 2024 y por la consecuente regulación en la materia.

7. Financiamiento

La estrategia de financiamiento debe garantizar la disponibilidad, sostenibilidad y complementariedad de recursos financieros públicos y privados para la formulación, implementación, seguimiento y evaluación del Protocolo, asegurando el respeto de los derechos fundamentales de los pueblos indígenas, en particular la autonomía, la libre determinación y la consulta previa, libre e informada (CPLI).

La estrategia se regirá por los siguientes principios:

- **Enfoque de derechos y perspectiva étnica:** los recursos deberán fortalecer el gobierno propio, los sistemas de conocimiento tradicional y la participación efectiva de las autoridades indígenas.
- **Complementariedad y orientación:** articulación de fuentes públicas y privadas sin sustitución de obligaciones estatales, de manera que cada fuente permita el cumplimiento de las obligaciones de cada tipo de actor (público, privado, sociedad civil).
- **Transparencia y trazabilidad:** mecanismos claros de seguimiento financiero y rendición de cuentas intercultural.
- **Autonomía indígena:** promoción de esquemas de administración directa o cogestión de recursos por parte de las organizaciones indígenas.
- **Salvaguardas sociales, ambientales y culturales:** coherencia con las salvaguardas REDD+ y los estándares internacionales de derechos humanos.

Las fuentes de financiamiento público, principalmente del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio del Interior y Ministerio Público permitirán la formulación, realización de la consulta pública y la consulta previa del presente Protocolo; así como de la coordinación interinstitucional necesaria para la ejecución de medidas de prevención, atención y seguimiento contenidas en este Protocolo. Estas fuentes de financiamiento incluyen asignaciones sectoriales de recursos del Presupuesto General de la Nación, Fondo para la Vida y la Biodiversidad, asistencia técnica y recursos no reembolsables provenientes de Cooperación Internacional. La destinación específica de estos recursos será establecida en los estudios de impacto económico de los instrumentos normativos de salvaguardas sociales y ambientales y REDD+.

Por otra parte, los Programas jurisdiccionales o proyectos REDD+ cuyos titulares sean actores públicos deberán contemplar dentro de su presupuesto el cumplimiento de los requisitos de este Protocolo.

Las fuentes de financiamiento privados incluyen los aportes de los titulares de proyectos REDD+, inversionistas, aliados técnicos y compradores de créditos de carbono, condicionados al cumplimiento del protocolo con perspectiva étnica. Estos recursos deberán incluir dentro de su presupuesto el cumplimiento de los requisitos de este Protocolo, así como constituirse en mecanismos de distribución justa y equitativa de beneficio, como quedó especificado en el numeral 4.4.

Referencias bibliográficas

- Camacho, A., et al. (2017). Análisis de salvaguardas sociales y ambientales en proyectos REDD+ en territorios indígenas. Bogotá: [Editorial u organización si aplica].
- CDA – Collaborative for Development Action. (2012). Do No Harm: How Aid Can Support Peace – Conflict-Sensitive Programming. Cambridge, MA: CDA Collaborative Learning Projects.
- Corte Constitucional de Colombia. (2024). Sentencia T-248 de 2024. M.P. [Magistrado/a Ponente]. Bogotá D.C.
- Congreso de la República de Colombia. (1991). Constitución Política de Colombia. Bogotá D.C.
- Congreso de la República de Colombia. (1993). Ley 99 de 1993, por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente y se organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA). Diario Oficial No. 41.146.
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2018). Resolución 1447 de 2018, por la cual se reglamenta el Registro Nacional de Reducción de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero – RENARE. Bogotá D.C.
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2020). Política para la Gestión Integral de la Biodiversidad y sus Servicios Ecosistémicos (PNGIBSE). Bogotá D.C.
- Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (2021). Estrategia Integral para el Control de la Deforestación y Gestión de los Bosques – “Bosques Territorios de Vida”. Bogotá D.C.
- Ministerio del Interior. (2018). Lineamientos para la garantía del derecho fundamental a la Consulta Previa, Libre e Informada. Bogotá D.C.
- Naciones Unidas. (2007). Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Nueva York: ONU.
- Naciones Unidas. (2011). Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Nueva York y Ginebra: ONU.
- ONU-REDD Programme. (2015). Social and Environmental Principles and Criteria. Ginebra: Naciones Unidas.
- Organización Internacional del Trabajo – OIT. (1989). Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes. Ginebra.
- Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo – PNUD. (2019). Guía para la integración de salvaguardas sociales y ambientales en proyectos climáticos. Nueva York.
- Fundación Gaia Amazonas. (2023). Mercados de carbono y pueblos indígenas en Colombia: riesgos, tensiones y aprendizajes. Bogotá D.C.
- UNFCCC – Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. (2014). Warsaw Framework for REDD+. Bonn: Secretaría de la CMNUCC.